

## El general no es honorable

Usted tendrá siempre mi lealtad incondicional, Presidente.

*Respuesta dada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército chileno, al presidente Allende, ante una pregunta por teléfono hecha por Allende el 7 de septiembre de 1973, cuando la Marina pretendió sublevarse.*

1972 había sido un año brillante para las Fuerzas Armadas chilenas en sus relaciones con el poder ejecutivo. El presupuesto para gastos militares había llegado a una cifra récord de 360 millones de dólares, lo que constituía el 4,6 % del Producto Nacional Bruto del país, y ponía a Chile a la cabeza de los países latinoamericanos (excluyendo Cuba), porcentualmente, en gastos militares. Incluso en cifras totales, Chile, con sus 360 millones de dólares, sólo estaba detrás de Brasil, con un presupuesto de 1.105 millones de dólares, y de Argentina, con 889 millones de dólares, en la lista de presupuestos militares desde México al sur.<sup>1</sup>

Además, los cursos en los fuertes militares del Ejército de los EEUU en la Zona del Canal de Panamá, se habían intensificado, y la asistencia de oficiales y suboficiales chilenos era mucho más nutrida.

Pero no sólo era eso. Gran cantidad de dólares de ese presupuesto tan abultado había sido destinada para mejorar el armamento liviano del Ejército y de Carabineros, lo cual ponía en un mejor pie de combate «contra la subversión interna» (de acuerdo a los entrenamientos impartidos en la Zona del Ca-

nal de Panamá) a las Fuerzas Armadas chilenas. Incluso el presidente Allende había echado adelante el proyecto de una extensa zona fronteriza con Argentina, en las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia, la cual, además de servir para iniciar planes pilotos de explotación de maderas y productos agrícolas, servía para adiestrar al Ejército y la Fuerza Aérea en «operaciones combinadas contraguerrillas».

Había sido un año excelente para las Fuerzas Armadas chilenas, sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente Allende había estado de acuerdo, desde 1970, con el cuerpo de generales de no modificar absolutamente nada de los planes de estudio, adiestramiento y cultura impartidos en los cuarteles, que eran confeccionados mayoritariamente en el seno del Ejército de los Estados Unidos en Washington.<sup>2</sup>

Y más todavía, durante 1971, a iniciativa del Gobierno de Salvador Allende, los sueldos de los altos mandos tuvieron un sustancial aumento. Por ejemplo, los generales de brigada pasaron de 12 sueldos vitales a 16 sueldos vitales, lo cual quería decir que obtenían un mejoramiento adicional del 33 % al obtenido por todos los trabajadores y empleados del país. En el año 1972, estos sueldos de generales de brigada subieron de 16 sueldos vitales a 21 sueldos vitales, lo cual significaba un aumento por sobre todos los demás chilenos que vivían de una remuneración de más del 31 %. Acumulando las cifras, teníamos que en los dos primeros años de Gobierno de Salvador Allende, los sueldos de los generales habían obtenido un mejoramiento de 75 % por sobre los ingresos producto de sueldos o salarios de los millones de otros chilenos.

Esto dejaba a los generales entre los 50.000 chilenos de más altos ingresos del país, de un total de tres millones que trabajaban.

Pero no sólo en el equipamiento, adiestramiento «antisubversivo» y situación económica personal había sido un buen año, para los generales y demás mandos militares.

A mediados de 1972, por una idea conjunta de los generales «reformistas» y «duros», se le comunicó a Juan de Dios Carmona que propiciara, por cuenta de su partido, el demócratacristiano, la dictación de una Ley Sobre Control de Armas, que dejara en manos de los mandos militares, a su entero arbitrio, el control de las armas en manos de los civiles. La idea fue encontrada buena por el Presidente Salvador Allende, y los parlamentarios de la Unidad Popular, junto con los parlamen-

tarios de la oposición, aprobaron esa ley, que llevaba el número 17.998.

En esencia, el texto de la ley permitía que los organismos de justicia militar podían ordenar el allanamiento de cualquier domicilio a las tropas, para buscar armas, en cualquier momento, circunstancia o lugar.

Al aprobarse esta ley tan buena para las Fuerzas Armadas, Salvador Allende dijo que «ésta es una herramienta en manos del pueblo para combatir a los saboteadores fascistas, porque las Fuerzas Armadas chilenas son una garantía de constitucionalidad y rectitud». Los hechos posteriores probaron que esto no era así. Que lo que se había dado era un instrumento formidable de poder a unas Fuerzas Armadas manejadas por oficiales al servicio del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena.

Y esos oficiales utilizaron este formidable instrumento. Y lo comenzaron a utilizar en forma sistemática, a partir de marzo de 1973 cuando, decidido ya el destino final del Gobierno constitucional, se trataba de estructurar una forma «rápida, eficaz y drástica» de llevar a cabo el derrocamiento. Por iniciativa del general de división Manuel Torres de la Cruz, planteada en marzo de 1973, inmediatamente después que los generales en contacto con el Pentágono comenzaron su operación final contra el Gobierno chileno, se acordó utilizar la Ley Sobre Control de Armas y Explosivos para seis propósitos principales:

- 1) Evaluar la real capacidad de combate de los obreros y campesinos, según fuera su protesta a los allanamientos que se iniciarían de manera masiva y mortificante para ellos.

- 2) Evaluar la cantidad de armas en poder de las organizaciones de masas y políticas de la izquierda.

- 3) Adiestrar a la tropa de las tres armas de los institutos militares en operaciones contra la población civil.

- 4) Adiestrarse en la coordinación de mando conjunto para las Fuerzas Aérea, Marina y Ejército.

- 5) Medir la capacidad de respuesta política de los partidos de la Unidad Popular.

- 6) Adiestrar psicológicamente a las tropas para que «comiencen a ver a los obreros, campesinos y estudiantes como sus enemigos».<sup>3</sup>

Los allanamientos a fábricas, locales sindicales, asentamientos campesinos, sedes de partidos políticos de izquierdas e incluso domicilios particulares de dirigentes populares, comen-

zaron a aumentar gradualmente en número y rudeza ejercida por las tropas al mando de oficiales fascistas.

Durante abril, mayo y junio se hicieron allanamientos en promedio de tres por semana. Ya en julio, este promedio subió a casi uno por día y en agosto fueron más de 45 en todo el mes.

El carácter de estos allanamientos lo dan las estadísticas del mes de julio de 1973. Hubo 24 en total. Y de ellos, diez fueron contra fábricas, tres contra oficinas de Gobierno, cuatro contra partidos de la Unidad Popular, tres contra casas de estudio de organizaciones populares... y sólo dos contra grupos fascistas armados.<sup>4</sup>

Y ocurre que en ese mismo mes, se habían hecho 128 atentados con armas de fuego y explosivos contra dirigentes de la Unidad Popular, sedes políticas y puentes, torres de transmisión eléctrica y periódicos de la Unidad Popular. Mucho más que eso todavía: los propios organismos fascistas como Patria y Libertad, habían hecho pública su responsabilidad por más de setenta de esos atentados. Sin embargo, nunca se allanaron los locales de grupos fascistas, ni domicilios de dirigentes.

De los 128 atentados cometidos por fascistas civiles, las fiscalías militares, navales y aéreas encargadas de investigarlos, declararon como «de autor desconocido» a 122.

Un caso típico fue el del atentado a la casa del contralmirante Ismael Huerta Celis, ex ministro de Obras Públicas del presidente Allende, miembro del grupo conspirador del vicealmirante José Toribio Merino y más tarde, después del golpe, nombrado ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar. El contralmirante Huerta vivía en Viña del Mar, y fue lanzada una bomba de alto poder explosivo a su antejardín. La policía civil descubrió al autor del atentado, un miembro de Patria y Libertad. Cuando los detectives lo llevaron a la casa de Huerta para reconstruir la escena, el contralmirante le dio la mano al saboteador, le palmoteó la espalda, le invitó a pasar a su casa y le ofreció café. Y acabó diciéndole, delante de los detectives: «No te preocupes, hombre. Ya arreglaremos todo esto. Dime qué necesitas en la cárcel y yo hablaré con tu abogado».

El informe de este extraordinario suceso fue pasado al presidente Salvador Allende, porque era evidente que se trataba de un autoatentado, para dar imagen de «caos social», y en el cual estaba involucrado un contraalmirante en servicio activo. Pero Salvador Allende dio orden de no hacer público el incidente<sup>5</sup>

Pero fue sólo en los primeros días de agosto de 1973, cuando el general Manuel Torres de la Cruz llevó sus planes de utilizar la Ley Sobre Control de Armas hasta un punto de poner a prueba los «seis puntos» de su teoría para «preparar el terreno» en el asalto final al Gobierno constitucional de Chile. En esa fecha, reuniendo cerca de dos mil hombres de tropa de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, de la guarnición de la austral ciudad de Punta Arenas, donde era comandante en jefe de la Quinta División de Ejército, el general dirigió una operación de cerco y allanamiento al «barrio industrial», cuya principal industria era la textil Lanera Austral. Para la operación utilizó tanques, cañones sin retroceso montados en jeeps, carros de asalto, helicópteros y vuelos rasantes de aviones. La novedad de la operación estaba en que había un «mando conjunto», bajo la supervigilancia del Ejército en la persona del general Manuel Torres de la Cruz. Las tropas y aparatos de guerra de la Fuerza Aérea estaban al mando del general José Berdichewski; las de la Marina, bajo la dirección del contralmirante Horacio Justiniano; y las de Carabineros, con el mando del general Hernán Fuentealba. Todos ellos de acuerdo «en la necesidad de terminar con el Gobierno de la Unidad Popular de una vez».

La operación de cerco, reducción de obreros y obreras, y allanamiento, comenzó en la helada madrugada y duró más de ocho horas. El centro del objetivo estaba en la textil Lanera Austral, donde no había más de doce personas en ese momento, de las cuales siete eran mujeres obreras. Los soldados entraron a la carrera, destrozando puertas, quebrando vidrios a culatazos y sacando a tirones a los obreros y a las obreras al patio, cuya superficie estaba congelada por el intenso frío de ese lugar (a 53 grados de latitud sur). Los prisioneros fueron obligados a tenderse en el suelo congelado, boca abajo y con las manos en la nuca, durante seis horas, mientras los oficiales y la tropa registraban la fábrica rincón por rincón. Las mujeres fueron encañonadas por los fusiles ametralladores, a las voces de los soldados «¿dónde están las armas, putas de mierda?». Un obrero, que estaba en esos momentos en el servicio higiénico, defecando, y por lo tanto no se dio cuenta de qué era lo que pasaba, fue sacado, tal como estaba, con los pantalones en las pantorritas, por los soldados, y semitriturado a culatazos, contra el suelo, mientras le gritaban «¡esto es para que aprendas a obedecer, maricón comunista!». Otro obrero, que estaba cerrando las llaves del agua caliente en una ducha, llamado Alberto Gonzá-

lez Bustamante, fue baleado por la espalda y muerto en el acto. El jefe del Servicio de Inteligencia en Punta Arenas, se instaló en el mismo lugar de los hechos para interrogar a los obreros detenidos, a quienes les ofreció la siguiente alternativa, según pudimos comprobar semanas más tarde los reporteros que hablamos con ellos: «Si me firman una declaración en que atestigüen que hallamos toneladas de armas escondidas, no los acusaremos de resistirse a las Fuerzas Armadas. Si no, por ese cargo van a ir presos por un buen tiempo». A las mujeres las amenazaron con violarlas allí mismo, pero las amenazas no se cumplieron. Ninguno de los obreros firmó la declaración que pedía el oficial del Ejército. El resultado del gigantesco operativo militar fue realmente grotesco: un revólver calibre 22, marca Star, argentino, utilizado por el cuidador nocturno de la fábrica.

Pero el suceso, por la muerte del obrero González Bustamante a manos de la tropa, causó conmoción pública entre las organizaciones de izquierda. El diputado socialista Mario Palestro, de la comuna de San Miguel (Distrito Pedro Aguirre Cerda) de Santiago, declaró enfurecido en la Cámara de Diputados que el «general Manuel Torres de la Cruz deshonor nuestras Fuerzas Armadas... Es un demente, un asesino... Se cree un reyezuelo y un sátrapa».

La directiva del partido socialista exigió a Salvador Allende que llamara a retiro al general Torres (una facultad privativa de los presidentes de Chile hasta el 11 de septiembre de 1973). Allende habló con el entonces comandante en jefe subrogante del Ejército, general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, para «exigirle» que destituyera a Torres de la Cruz. El general Pinochet le dijo que a su entender, y al entender del cuerpo de generales del Ejército, el «comandante en jefe de la Quinta División cuenta con toda la confianza del Estado Mayor», y que, por eso mismo, no se podía hacer nada. Pinochet, en un gesto típico de su acción doble, de traición a Allende a partir de julio de 1973, le expresó que «hay que esperar un poco, que las aguas se calmen, para limpiar los altos mandos de gente sin criterio político, Excelencia». Por su parte, el general Carlos Prats, ya fuera de toda capacidad de influir en el Ejército, ni siquiera fue consultado por Allende en este incidente.

Así, en vez de ser destituido Manuel Torres de la Cruz, la comandancia en jefe del Ejército se querelló judicialmente contra el diputado socialista Mario Palestro, por «injurias graves y ofensas al Ejército de Chile».

El 29 de agosto, el periódico «El Mercurio», publicó en forma destacada en su página número dos, una crónica que se titulaba *El general Torres de la Cruz y las Actividades de la Quinta División*. En parte del texto, escrito por una reportera, se decía: «Manuel Torres de la Cruz es un hombre robusto, y sin ser alto resulta imponente, su gesto es siempre amable... firmemente amable. El primer encuentro con el comandante en jefe de la Quinta División del Ejército, con asiento en Punta Arenas, se produce a bordo del avión que lo trasladaba a su jurisdicción; en Santiago, se había negado a hacer declaraciones a la prensa, aduciendo que se encontraba fuera de ella. Bajo inmediatamente después de él; antes de pisar la escalera del avión se vuelve y me dice con serenidad y satisfacción: «Va a ver algo que puede interesarle». En la losa del aeropuerto Presidente Ibáñez se encuentran formados los oficiales de la Marina, la Aviación y el Ejército; están el contralmirante Horacio Justiniano y el comandante subrogante de la Fuerza Aérea, Eduardo Clavijo. El titular, José Berdichewski, lo iría a saludar horas después, a su llegada del extranjero»...

«El Mercurio» había entendido «el mensaje» del general Torres de la Cruz, en el sentido de que las tres armas del aparato militar chileno estaban sólidamente unidas detrás del comandante en jefe de la Quinta División, y como en esa fecha ya muchos sectores oligárquicos sabían que «el golpe es en cualquier momento», se figuraron que Manuel Torres de la Cruz sería el jefe de la futura Junta Militar... y comenzaron a «dar una buena imagen pública de él». La crónica cumplía este cometido en algunos párrafos escogidos como estos:

«¿Su opinión acerca de los militares en el Gobierno?

»...of the record.

»Como militar y como hombre, ¿qué cualidades admira en el ser humano?

»La franqueza y la lealtad; por eso, detesto lo contrario, la hipocresía y la falta de hombría.

»¿Cuál es la misión específica del Ejército en este momento en Chile?

»*Seguir manteniendo la seguridad interna de nuestro país, protegiendo la soberanía y luchando para quienes no conocen nuestras Fuerzas Armadas no continúen tratando de dividir las, lo que no lograrán...*»

Todo este suceso, ya a fines de agosto de 1973, probaba que la maquinación militar montada por orden del Pentágono de

los EE.UU. para derribar a Salvador Allende, destruir la democracia burguesa chilena, reemplazarla por un Gobierno fascista incluso más brutal que el de Brasil, y articular un «frente común» en el cono sur de América Latina contra el progreso y el desarrollo de los pueblos, ya estaba funcionando.

Demostraba también que el general Manuel Torres de la Cruz había evaluado bien el grado de desarticulación de los partidos de la Unidad Popular, la posición indecisa y suicida de Salvador Allende y el partido comunista de Chile, al plantear su tesis «de los seis puntos» en los allanamientos masivos. El había dicho que «los marxistas no se atreverán a pararnos... nos tienen un miedo pánico». Y los hechos lo estaban demostrando. El había dicho «no se atreverán a empujar al populacho contra nosotros, porque también le tienen miedo pánico el Presidente y sus apoyos comunistas». Y los hechos, desgraciadamente, seguían demostrándolo.

Los allanamientos protagonizados por las tropas de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y Carabineros, a lo largo de todo Chile, habían sido hechos con una brutalidad sin límites. Habían destrozado maquinarias, muebles de modestos obreros en sus casas, ropas, libros, herramientas, archivos de regionales de la Central Unica de Trabajadores. Habían golpeado brutalmente a hombres, mujeres e incluso niños indefensos. Un batallón de la Fuerza Aérea, en Santiago, había allanado el Cementerio Metropolitano, en el sur de la ciudad, de noche, desplegando un gigantesco aparato de guerra incluso con helicópteros artillados. Sus enemigos habían sido dos cuidadores del cementerio, a quienes golpearon y mantuvieron arrodillados con las manos en la nuca durante nueve horas, bajo una lluvia intensa. En ese allanamiento destrozaron más de cincuenta ataúdes, tirando los restos de los muertos en la superficie, y dejándolos allí, confundidos unos con otros, actuando brutalmente también contra los deudos de esos muertos.

Y lo más increíble, desde el punto de vista de la «justificación pública» del inmenso aparato de «búsqueda y destrucción contra las cosas» que desataron durante cinco meses los generales chilenos en contacto con el Pentágono, es que NUNCA encontraron otras armas que aquellas portadas por los vigilantes nocturnos de los locales atacados. Y además, después de esas inmensas movilizaciones de gente en pie de guerra, exhibían como «armas encontradas», largos listones de madera, cascos de obreros de la construcción, varillas de coligüe (una especie de

bambú chileno, mucho más delgado) y herramientas de trabajo personales, calificándolos de «objetos contundentes».

Todos estos listones y varillas eran las utilizadas para portar banderas en los desfiles, y para ser usados como defensa contra los ataques de los grupos fascistas civiles en las manifestaciones públicas. Es típico el caso del allanamiento a la sede de la Central Unica de Trabajadores (organización de los trabajadores y un sector de los empleados de Chile, que agrupaba a casi un millón de afiliados) en la ciudad de Osorno. Esa sede era al mismo tiempo casa habitación de un obrero. En el patio interior de su casa tenía una plantación de porotos (frijoles blancos), la cual exige, para que las plantas tomen sol, un armazón de listones por donde las guías de la planta suban aferrándose. Pues bien, las tropas requisaron esos listones del pequeño huerto (veinticuatro listones de metro y medio de largo) como «armas».

Y ocurre que mientras las tropas del aparato militar chileno, en acción conjunta, ponían en práctica la etapa de «ablandamiento y reconocimiento» contra el pueblo de Chile, con el pretexto de «desarmar» a quienes propician «la violencia en el país», había generales que estaban protegiendo a los grupos fascistas como Patria y Libertad para que contrabandearan armas desde Argentina y Bolivia.

En el norte, el comandante en jefe de la División Blindada (Sexta División), general de brigada Carlos Forrestier Haengsen, protegía al grupo de contrabandistas de armas dirigido por Roberto Thieme, segundo jefe de Patria y Libertad, y el ex capitán de Ejército Arturo Marshall (complicado con el ex general Roberto Viaux en la conspiración para asesinar al general René Schneider en 1970), que tenían a las ciudades de Salta, en Argentina, y Oruro, en Bolivia, como centro de operaciones. Por allí entraban explosivos, armas automáticas y municiones bajo la protección de Forrestier. Este general era católico (al igual que Manuel Torres de la Cruz), definido por sus amigos como «El Nazi» y latifundista expropiado por la reforma agraria durante el período de Salvador Allende.

En el centro-sur del país, el general de brigada Washington Carrasco Fernández, comandante en jefe de la Tercera División (con asiento en Concepción), daba protección no sólo a los miembros de Patria y Libertad al guardarles sus arsenales terroristas, incluso en las casas de oficiales de su Estado Mayor, sino también a los Comandos Rolando Matus, del Partido Nacio-

nal, y los Comandos de Ex Cadetes, del agente de la CIA Federico Willoughby McDonald. Este general Carrasco, estrechamente ligado al Servicio de Inteligencia Militar, en relación directa con el Pentágono<sup>6</sup> (su relación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es tan grande, que en diciembre de 1973, la Junta Militar lo designó jefe de la Misión Militar en la Embajada de Chile en Washington, para tener «al hombre preciso en el lugar correcto», arriesgando dejar la Tercera División en manos de un general sumamente inepto, como es Agustín Toro).<sup>7</sup> Además el general Washington Carrasco Fernández tenía relaciones directas con la oligarquía chilena a través del senador nacional Francisco Bulnes Sanfuentes, empresario monopolista y socio del consorcio norteamericano WR Grace. El general Carrasco formaba parte de los «reformistas».

Por su parte, el comandante en jefe de la División de Caballería, general de brigada Héctor Bravo Muñoz, protegía los adiestramientos que los latifundistas de la provincia de Valdivia hacían para afrontar el creciente movimiento campesino de liberación, que exigía más tierras y la expropiación de los latifundios, sin pago alguno para los empresarios de la tierra y considerando en esa expropiación toda la maquinaria y las instalaciones de las haciendas. El general Bravo Muñoz estaba ligado estrechamente al Pentágono de los EEUU a través del general Mario Sepúlveda Squella, que fuera comandante de la Segunda División del Ejército y de la guarnición de Santiago hasta el 24 de agosto de 1973, fecha en que renunció al conocer los planes para asesinar al Presidente Allende simulando un suicidio (lo mismo ocurrió con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Militares hasta ese mismo día en que renunció por las mismas razones). Bravo Muñoz era ultracatólico, como Manuel Torres de la Cruz, y formaba parte del grupo de los generales «constitucionalistas» encabezados aparentemente por Carlos Prats González.

### *Ultimo mensaje*

Cuando el 21 de mayo de 1973, el presidente Allende leyó ante el nuevo Congreso Nacional, elegido el 4 de marzo, su mensaje anual a la nación, la situación era explosiva desde todos los ángulos posibles. El costo de la vida había tenido un alza, en los últimos doce meses, de 195,5 %. El día 16 de mayo, los stocks

de combustibles líquidos (gasolina y parafina) se habían agotado, y el gas licuado estaba en serios problemas de abastecimiento. A tal punto, que el Gobierno mexicano despachó a Chile un buque tanque velozmente, para salvar las necesidades de combustible de la entrada del invierno en Chile, a petición desesperada de Salvador Allende.

Había realmente un descalabro económico mayúsculo, producto del sabotaje sistemático del capital monopolista en manos privadas chilenas y yanquis, y del imperialismo de los EEUU, durante los tres años del Gobierno elegido en septiembre de 1970. Sólo como referencia, daremos algunos antecedentes.

«Las líneas de crédito de la banca norteamericana comenzaron a disminuir inmediatamente. De 219 millones de dólares que tenían otorgados en líneas de crédito en agosto de 1970 bajaron rápidamente a 32 millones al promediar 1971. Lo propio aconteció con los organismos bancarios internacionales y las instituciones financieras de Estados Unidos. El ministro Orlando Millas, en su exposición del estado de la Hacienda Pública, señaló que entre 1964 y 1970 Chile contrató en el BID, el BIRF, AID y el EXIMBANK créditos por 1.031 millones 806 mil dólares, lo que hacía un promedio anual cercano a los 150 millones de dólares. En 1971 este volumen disminuyó a 40 millones de dólares y se ha reducido a CERO en el curso de 1972 (Hugo Fazio: *El Bloqueo Financiero*, «Revista de la Universidad Técnica del Estado», enero-febrero de 1973).»

«Charles W. Bray, portavoz del Departamento de Estado, dijo en Nueva York que “en cuanto a la caída de los préstamos externos e inversiones en Chile no parece necesario buscar ninguna razón exótica”. Bray manifestó que la moratoria unilateral de Allende en los pagos de la deuda externa adoptada el año pasado “ha dañado seriamente el crédito de Chile” (Cable de la agencia United Press International, de 6 de diciembre de 1972).»

«Cuando estos contactos sean llevados a cabo ( el *memorandum* escrito al presidente de la ITT, el 20 de octubre de 1970, se refiere al doctor Henry Kissinger, mister Meyer y mister Irwin, del Departamento de Estado, al secretario William Rogers y al presidente Nixon), nosotros exigiremos que los representantes norteamericanos de los bancos internacionales tomen una acción decidida en contra de cualquier petición de préstamos de los países que expropian compañías norteamericanas o ejerzan acciones negativas contra el capital privado extranjero. Y, como parte de nuestra acción total, debemos pedir a nuestros amigos

del Congreso que alerten a la Administración norteamericana, avisándoles que de continuar un tratamiento inadecuado del capital privado norteamericano, esto traerá como consecuencia una reducción de los fondos de los contribuyentes norteamericanos en los bancos internacionales. (Parte de los documentos de la ITT, dados a conocer por el periodista yanqui Jack Anderson).»

«La Kennecott Cooper está tratando de lanzar un bloqueo internacional legal a los embarques de cobre chileno... La batalla en el Tribunal de París no podría haberse producido en un momento peor para Chile, que obtiene alrededor de un 70 % de sus divisas de la venta del cobre... Este país ya está hirviendo con la inquietud política y social y se está balanceando al borde de la bancarrota. Obviamente la ofensiva de la Kennecott perjudicará posiblemente las futuras ventas de cobre a los clientes que no desean arriesgar disputas legales y posiblemente atrasos costosos en las entregas.

«Los ejecutivos de la Kennecott están decididos a mantener esta situación candente sobre Chile. La oficina de Manhattan del Consejero General, Pierce McCreary, que está dirigiendo la campaña, tiene el aspecto de una sala de guerra. Su escritorio está sembrado de informes de embarques y sobre una pared cuelga un gran mapa para marcar las rutas de los barcos.

«Desde aquí, McCreary mantiene una estrecha vigilancia sobre los barcos que entran o salen del puerto chileno de San Antonio, el único lugar desde donde se embarca el cobre de El Teniente. Actualmente está observando los movimientos de por lo menos seis barcos que se dirigen a Europa cargados con el metal de El Teniente; cuando lleguen enviará a sus agentes allí para recibirles con órdenes judiciales (Revista "Time", del 6 de noviembre de 1972).» Por supuesto, la revista «Time» no podía agregar en su crónica que a la Kennecott en Nueva York le llegaban los informes de los zarpes de los barcos con cobre desde San Antonio, vía marina de los Estados Unidos, a través de los mensajes provenientes de la Primera Zona Naval de Valparaíso, bajo el mando del vicealmirante José Toribio Merino. Es decir, el espionaje para la Kennecott se efectuaba en un puerto chileno, por medio de ¡oficiales traidores a su patria en Chile!... El vicealmirante Merino es hoy día uno de los «salvadores de la Patria», como miembro de la Junta Militar. Este hecho fue denunciado por «El Rebelde» (Santiago, octubre 1972).

«...después de la decisión tomada por la mayoría de los organismos internacionales de crédito de cesar todas sus actividades

en favor de Chile, la ofensiva sobre el cobre, conducida con el apoyo tácito del Gobierno norteamericano y lanzada por la Democracia Cristiana, se unen en una misma y vasta operación que tiende literalmente a estrangular la experiencia emprendida después de octubre de 1970 por el presidente Allende ("Tribuna", de Lausana, del 17 de octubre de 1972.)»

Pero no era solamente el bloqueo financiero imperialista de los Estados Unidos (bloqueo solamente contra la economía global chilena, pero dejando a salvo el financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, que en el mismo período recibieron préstamos norteamericanos cuantiosos, incluso para comprar un avión Hércules C-130, para 90 paracaidistas, con su equipo completo, por valor de 5 millones de dólares, y varias naves de guerra menores y equipamiento liviano para «lucha contra subversión interna,<sup>8</sup> y el sabotaje sistemático de los monopolios chilenos los que habían descalabrado a tal punto la economía del país. Se sumaba a ello la falta de flexibilidad del sistema financiero internacional que, incluso con los préstamos de la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, impedía zafarse de los efectos destructivos del cierre de los préstamos norteamericanos. Se sumaba también un notable porcentaje de incapacidad de los mandos medios en el aparato económico de la Unidad Popular, incluyendo (aunque en número muy minoritario) casos de corrupción administrativa y de desvíos de dinero hacia el financiamiento de cajas electorales y de pago de funcionarios de algunos partidos políticos. Sin embargo, en una relación cuantificada de las causas de la cuasi bancarrota económica del país en el primer trimestre de 1973, el porcentaje de la inepticia y la corrupción de miembros responsables de la Unidad Popular es mínimo, comparado con el sabotaje sistemático, brutal y sumamente despiadado de los monopolistas privados chilenos y norteamericanos. Incluso más, se podría afirmar científicamente que aun en el caso de que no hubiera habido ni inepticia ni corrupción en algunos sectores de la Unidad Popular, el descalabro económico habría sido tan significativo como era en ese momento.

En todo caso, la situación se podía resumir con algunos aspectos como éstos:

a) Por primera vez en la historia de la gran minería del cobre chileno, el mineral de Chuquibambilla no tuvo utilidades en 1972, y acusó una pérdida cercana a los 5 millones de dólares. La falta de repuestos y su reemplazo a tiempo, por el cierre del mercado norteamericano, fue la causa principal.

b) En 1972, la enorme industria textil Sumar, estatizada en 1971, arrojó pérdidas por 132 millones de escudos (unos 11 millones de dólares).

c) La Corporación del Cobre informa que la mina de cobre de Chuquicamata tuvo una baja de producción de 15000 toneladas en 1972 en comparación con 1971. El mineral de cobre de La Exótica marca una baja de 4000 toneladas en el mismo período, y el mineral de El Salvador una disminución de 2000 toneladas.

d) El balance al 30 de junio de 1972, señala para la Distribuidora Nacional (DINA) del sector estatal, una pérdida de 20 millones de escudos y un endeudamiento con el sistema tributario y de seguro social del Gobierno de 172 millones de escudos.

e) La Compañía Chilena de Electricidad (que fue comprada por el Gobierno de Frei a la American Foreign Power de los EE.UU. en 1970, por 186 millones de dólares, teniendo instalaciones que valían sólo 18 millones de dólares), acusa en 1972 una pérdida de 250 millones de escudos.

f) En mayo de 1973, el ministro de Agricultura, Pedro Hidalgo, declara a los periodistas que como resultado del bloqueo externo, han dejado de funcionar la mitad de las grúas de un sector del puerto de Valparaíso. Por la misma causa de falta de repuestos, hay 250 locomotoras de la Empresa de Ferrocarriles del Estado paralizadas, de un total de 500 locomotoras que posee la empresa.

Ninguno de los efectos relatados brevemente más arriba podrían haber sido evitados sustancialmente desde el punto de vista económico, ya que tenían su origen en una presión constante (sobre una economía capitalista dependiente del imperialismo norteamericano) de las fuerzas monopólicas privadas chilenas y extranjeras, con una meta bien precisa: provocar el descalabro del aparato productivo para obligar a los trabajadores, azotados por la miseria consecuente, a quitarle su apoyo al Gobierno de la Unidad Popular, y dejarlo a merced del esquema de derrocamiento. Y no podrían ser evitadas porque el programa político, económico y social de los dirigentes de la Unidad Popular no era socialista, no estaba dirigido por los trabajadores y se había metido en una batalla por el poder económico dentro de las propias leyes de funcionamiento del capitalismo monopólico dependiente del imperialismo, dejando así en manos de la oligarquía y los consorcios transnacionales la mayor capacidad de maniobra. Un ejemplo de la debilidad extrema de la posición meramente desarrollista, y no socialista, de todo el programa de

Gobierno de la Unidad Popular, lo da el estrangulamiento externo considerando sólo cuatro factores: el bloqueo financiero, el cambio en el precio mundial del cobre, el aumento de los precios mundiales de los alimentos y la presión interna por importar más alimentos.

Los efectos combinados de estos cuatro factores significa que para los años 1971 y 1972, el país perdió MIL CIENTO CINCO MILLONES DE DÓLARES. El bloqueo financiero significó la necesidad de remitir al exterior 200 millones de dólares por concepto de movimiento de capitales; la baja del precio del cobre, de 64 centavos la libra en 1970, a 49 centavos en el 71 y el 72, lo que costó al presupuesto nacional una menor entrada de 460 millones de dólares en esos años; el alza de los precios mundiales del trigo en un 51 %, la mantequilla en un 88 %; la carne congelada en un 40 % y el azúcar en un 86 % (precios del mercado de Nueva York), acumuló un mayor gasto de 275 millones de dólares en el bienio; y el aumento en volumen de las importaciones de trigo (300 mil toneladas en 1970 contra más de 500 mil toneladas en 1971) y de leche descremada (3.800 toneladas en 1970 contra 38.400 toneladas en 1971) significó un aumento de los gastos de 50 millones de dólares para 1971 y de 120 millones de dólares para 1972.

Si a esto sumamos que, para 1973, el Gobierno debía pagar 493 millones de dólares por concepto de amortizaciones e intereses de la deuda externa (duplicada en el período de Eduardo Frei y aumentada en casi mil millones de dólares por Allende a causa de la nacionalización de las minas de cobre, hierro, salitre y expropiación de algunas industrias norteamericanas), tenemos un cuadro de debilidad extrema en el sector externo, causada precisamente por lo contrario que argumentaban quienes planificaban el derrocamiento de Allende. Es decir, por no ser un programa económico ni político socialista el del Gobierno de la Unidad Popular, sino el de un reformismo desarrollista profundo.

La medida exacta del problema externo lo da el hecho de que el TOTAL de los ingresos en divisas de Chile, anualmente, no supera los 1.200 millones de dólares.

Esto quería decir que por el bloqueo externo, manejo de los precios mundiales por el imperialismo norteamericano, pago obligado de una deuda externa hipertrofiada y la importación de alimentos indispensables, el Gobierno se veía obligado a gastar 1046 millones de dólares anuales, lo que dejaba disponibles para

importación de maquinarias, repuestos, combustibles y materias primas industriales la escuálida suma de menos de 150 millones de dólares anuales. Eso, naturalmente, produjo una paralización gravísima del aparato productivo nacional, metiendo a su economía en una espiral inflacionista gigantesca.

Ahora bien, si a esto agregamos el sabotaje interno de los aliados chilenos de los consorcios multinacionales como la ITT, Anaconda, Kennecott y bancos como el Chase Manhattan y el First National City, el cuadro se completa. Dos datos para la comprensión:

1) Solamente en 1972, los grupos monopólicos chilenos desplazaron más de 100 millones de dólares desde la reinversión a la especulación, y dejaron de reinvertir capitales en el aparato productivo privado (más del 60 % del total nacional) en un orden del 54 %.

2) La mayoría política al servicio de los intereses norteamericanos y oligárquicos chilenos en el Parlamento, solamente aprobó durante el año 1972 veinte proyectos de leyes que significaban un mayor gasto de 60.000 millones de escudos con un financiamiento de sólo 12.000 millones de escudos. ¡Es decir, obligó al Gobierno a emitir billetes sin respaldo productivo, por este solo concepto, por la enorme suma de casi 4000 millones de dólares! ¡Cerca de la mitad del producto nacional bruto! Con esto, además, se impidió que los empresarios monopólicos privados chilenos y extranjeros ayudaran al financiamiento de la economía nacional por medio de mayores tributaciones, trasladando la carga económica a los hombros de los obreros, campesinos, empleados y empresarios pequeños y medios, los que pagaban principalmente los efectos inflacionarios de estas gigantescas emisiones de billetes sin respaldo.

Sin embargo, todo este cuadro de tragedia económica provocado por la conspiración monopólica chilena-norteamericana para crear las condiciones «objetivas» del derrocamiento de Allende, había tenido una respuesta no calculada por los conspiradores. A medida que el caos económico se agravaba quedaba más claro el sabotaje de las fuerzas reaccionarias, y las organizaciones populares, al margen de las directivas de los propios partidos de la Unidad Popular, habían ido transformando lo que se bautizó como «poder popular para aumentar la producción» (discursos de Allende y directivas públicas del Partido Comunista de Chile en 1970, 1971, 1972 y 1973), en un esbozo de «poder popular para hacer la revolución». Ya en mayo de 1973 estaba

claro tanto para los directivos de la Unidad Popular como para los jefes de las Fuerzas Armadas chilenas y sus líderes ideológicos en el Pentágono, así como para los dirigentes de la oligarquía nacional, que había en el seno de la clase obrera, de los campesinos y los empleados un movimiento «independiente» que, sacando experiencia de los años 1971 y 1972, había llegado a conclusiones bien claras sobre cómo salir de la crisis económica, política y social en que estaba sumida la democracia burguesa chilena.

Grandes sectores del partido socialista, incluyendo a su secretario general Carlos Altamirano; el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), llegaron a la conclusión de que la tesis del Partido Comunista de Chile y del propio Salvador Allende englobaba en el concepto de la «vía chilena hacia el socialismo» y basada en la subjetiva idealización de un supuesto «tránsito pacífico al socialismo», había entrado en bancarrota. Que incluso constituía un freno a la revolución chilena por ser un factor de debilidad, ante las conciliaciones con los monopolios privados chilenos y norteamericanos, y un enorme peligro de que todo el aparato reformista semiconstruido por Salvador Allende fuera destruido, junto con la democracia burguesa, para dar paso al fascismo. Y que, por eso mismo, el pueblo chileno se hallaba ante una coyuntura histórica en la que: o tomaba el camino de prepararse para destruir «las fuerzas de reserva estratégica del imperialismo y de la oligarquía en Chile: sus Fuerzas Armadas» y para expropiar todo el poder económico y político de la oligarquía y el imperialismo en Chile, o serían atacados por una contrarrevolución armada que implantaría el fascismo. Esto hizo que estos sectores de la Unidad Popular se sumaran a las tesis sustentadas desde muchos años antes por grupos de izquierda revolucionaria como el Partido Comunista Revolucionario, pero sin haber logrado dar forma, hasta ese instante, a una táctica adecuada para las condiciones chilenas.

Como una manera de evitar que el pueblo tuviera que afrontar una contrarrevolución armada inerte, esos grupos políticos trataron durante todo el año 1973 (hasta septiembre) de impulsar la movilización de miles de obreros y campesinos, empleados y estudiantes, exigiendo al Gobierno avanzar en el proceso de expropiaciones, exigiendo control de los trabajadores en las industrias y empresas del área social, exigiendo que los funcionarios ineptos y corrompidos, los burócratas y los dirigentes sindi-

cales reformistas fueran sacados de sus cargos y reemplazados por auténticos representantes de los obreros, campesinos y empleados; exigiendo la aplicación drástica de las propias leyes burguesas contra los saboteadores de la economía nacional, y por último, planteando la necesidad de una enorme movilización a nivel masivo, en constante actitud de vigilancia y de combate que neutralizara el complot fascista de las Fuerzas Armadas por el tiempo suficiente para lograr una organización obrera armada capaz de oponerse a los intentos del Pentágono y de los altos mandos chilenos por colocar a Chile en el yugo de los grandes consorcios yanquis dócilmente.

Infortunadamente, toda esta movilización se vio entrabada, perseguida e incluso denunciada por los propios dirigentes políticos cercanos a Salvador Allende y del Partido Comunista de Chile, y cuando los militares en contacto con el Pentágono dieron la señal de partida para la destrucción de la democracia burguesa el 11 de septiembre de 1973, no había todavía una preparación adecuada de defensa, ni armas en manos del pueblo, ni un criterio uniforme para asumir la defensa de la democracia contra el ataque fascista.

Sin embargo, todo este fenómeno de «emergencia política» de grandes sectores del pueblo chileno, era lo que había hecho decir al Pentágono, en su «informe de octubre», que «la insurrección popular estaba en el punto de despegue» en Chile y que era necesario impedirle que «despegara», para lo cual ordenó a los generales chilenos servidores del imperialismo norteamericano que derrocaran a Allende «lo más pronto posible» y en «el momento más adecuado» para impedir un enfrentamiento «dudoso» con ese naciente «poder popular» al margen del manejo que hasta ahora habían hecho de él el presidente Allende y sus apoyos políticos como el Partido Comunista de Chile.»

El 21 de mayo de 1973, en su Mensaje al nuevo Parlamento chileno, el presidente Salvador Allende, que sabía tan bien como el que más que «el nuevo poder popular» se le escapaba de las manos, trató de utilizar ese «fantasma que recorre Chile» para asustar a la oligarquía y convencerla de que le diera tiempo para «encauzar» las inquietudes populares e impedir que se transformaran en una revolución cabal.

De manera dramática, el presidente Allende fue exponiendo ese día su «petición de mayor plazo» a los enemigos políticos que habían decidido derrocarlo porque «ya no es capaz de impedir la insurrección popular». Dijo: «El dinamismo de un pro-

ceso revolucionario libera energías reprimidas, hiere intereses dominantes, genera fenómenos sociales que pueden ser guiables Y QUE EL GOBIERNO SE HA FORZADO EN CONTROLAR... Pero, para que esto culmine satisfactoriamente, se necesita un régimen institucional flexible.»

Y Allende propuso una reforma de todo el aparato del Estado burgués para «controlar» los «fenómenos sociales nuevos», y así impedir que destruyeran todo el sistema de dominio de la burguesía. Pero los parlamentarios que lo estaban escuchando ese día 21 de mayo de 1973 estaban representando el pensamiento del Pentágono, de sus subordinados entre los generales de las Fuerzas Armadas chilenas y de la oligarquía chilena que, desde noviembre de 1972 y marzo de 1973, habían dado por terminado el «experimento reformista para impedir la revolución» habiendo estimado que «la subversión del populacho» ya no se detiene ni con reformas ni con Allende ni con Frei... Se detiene con el fascismo en su expresión más cruel y despiadada. Y por eso no escuchaban las llamadas angustiosas de Allende, como ésta:

«Más que los problemas económicos coyunturales por los que atravesamos, el Gobierno atribuye mayor trascendencia a la real y seria amenaza que pesa sobre nuestra democracia. Como pueblo y como nación pocos peligros aparecen más graves ya que la quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra capacidad política colectiva para resolver los problemas de la comunidad por medios distintos de la violencia física que algunos buscan obsesivamente. Enfrentamiento cuyas trágicas consecuencias acarrearían un profundo drama humano, además de catastróficos efectos económicos... Hoy adquiere mayor realismo lo que anticipara en mi primer mensaje: "Si la violencia, interna o externa, en cualquiera de sus formas —física, económica, social o política— llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que, con legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al socialismo". El enfrentamiento diario entre conservación y revolución, del que somos protagonistas, ha acumulado una densa carga de violencia social que, hasta el momento ha sido posible contener dentro de los límites razonables, o sofocar cuando se ha desbordado... No son los campesinos hambrientos de pan

y de justicia que se toman —procedimiento que no compartimos— un pedazo de tierra para trabajarla, quienes amenazan la paz. Para ellos, el desarrollo de la revolución significa liberarse de su explotación secular. Son más bien aquellos que no toman nada, porque lo tienen todo, pero que están obsesionados en crear las condiciones de una guerra civil, los verdaderos propulsores de la violencia... Para nadie puede ser un secreto que el problema clave que estamos viviendo es la crisis generalizada del orden tradicional, mientras dificultosamente emerge una nueva estructura de relaciones sociales.»

Y pedía Allende que le dejaran asistir a ese parto social porque *«la jerarquía, la autoridad y el orden burgués han perdido su vigencia ante los trabajadores*, quienes se esfuerzan por crear, dentro del régimen institucional del Estado y su normativa legal, un orden y una disciplina que repose socialmente en ellos mismos. Comités de Dirección del Área Social, Consejos Comunales Campesinos, Consejos de Salud, Consejos Mineros, Juntas de Abastecimientos y Precios, Cordones Industriales, Comandos Comunales, etc., son otras tantas manifestaciones de esta realidad surgida después de 1970. En pugna con la estructura de la antigua clase dominante, las instituciones de la naciente organización social están buscando, ensayando, criticando y recreando su propio estatuto de trabajo y disciplina.»

El presidente Allende resumía que el «aparato del Estado se habría paralizado» a consecuencia del sabotaje interno y externo que soportaba su Gobierno, si no hubiera ocurrido «la conjunción de los trabajadores y de las Fuerzas Armadas y de Orden» (resulta notable esta afirmación, el 21 de mayo de 1973, cuando Allende se aferraba a la idea de que los altos mandos militares podían ser convencidos por él para ayudarlo en su experimento, aun cuando era notorio que los generales estaban conspirando para derrocarlo en cualquier momento).

Por último, en su dramático mensaje al Parlamento, Allende pidió a la mayoría parlamentaria reaccionaria que lo ayudara a crear una «nueva institucionalidad» y que él, a cambio, se esforzaría «en controlar» el movimiento de obreros, campesinos y empleados que pugnaba por la revolución. Y para poner pruebas en sus palabras, terminó su mensaje con un llamado a los trabajadores a trabajar y sólo a trabajar... ¡precisamente en los momentos en que sus enemigos ya flectaban las piernas para lanzarse al cuello del pueblo y degollarlo! Estas fueron sus palabras:

«El Gobierno Popular apela a la conciencia y sentido de clase de todos los trabajadores. Sus logros sociales, sus libertades políticas, sus organizaciones, su poder para desafiar a la fuerza del capitalismo nacional e imperialista y su capacidad para edificar la nueva sociedad son grandes instrumentos. La reacción nacional e internacional pueden destruirlos. Pretenden arrasar las conquistas de los trabajadores. Ante una amenaza tan real y presente, los trabajadores no permitirán que se les use. Sus reivindicaciones económicas no pueden ser utilizadas por la burguesía contra el Gobierno y el proceso revolucionario. La disciplina social y el esfuerzo consciente deben marcar la ruta del trabajo. Chile exige mayor producción, una mayor productividad.»

Pero ya nadie quería escuchar a Salvador Allende entre los servidores políticos de la oligarquía y el imperialismo. La orden había llegado desde Washington y, por mucho que Allende se esforzara por convencerlos, su destino estaba marcado: debía ser derrocado. Las palabras del diputado nacional (y miembro secreto de la organización fascista Patria y Libertad), Hermógenes Pérez de Arce, comentando el mensaje, fueron elocuentes: «Este mensaje sólo puede servir para convencernos de cuán necesario es para nuestro país deshacerse de esta generación de demagogos... Que el señor Allende deje de hablar... y dé paso en Chile... a quienes sepan gobernar.»

### *Nuevo paso adelante*

En verdad el presidente Allende tenía razón para estar desesperado. La ofensiva reaccionaria pedida por los generales en contacto con el Pentágono estaba llegando a una violencia tremenda. El mes de mayo marcaba ya el segundo mes de una gravísima huelga de los trabajadores de El Teniente, mineral de cobre nacionalizado. La huelga había comenzado el 20 de abril y estaba siendo manejada por el grupo de Frei en estrecha alianza con la organización fascista Patria y Libertad.

De acuerdo a los cálculos correctos de los reaccionarios, la crisis económica debía provocar un gran aumento de las huelgas de trabajadores por mayores aumentos de sueldos y salarios, lo cual, una vez más, serviría para agudizar esa misma crisis económica, ya que el Gobierno Allende era incapaz de ensayar una salida de la crisis que echara sobre los hombros de la oligarquía

el peso de pagar las consecuencias vía mayores tributos a las ganancias de capital e incluso la renta personal. En este esquema, sobre todo a través de las organizaciones sindicales de la Democracia Cristiana, los propios dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril se encargaron de influir en las huelgas de los trabajadores.<sup>10</sup>

Un caso típico fue el de la huelga de El Teniente en la que se exigía un sobreauento de salarios del 41 %. A través de Guillermo Medina, dirigente máximo de los trabajadores en huelga, la Democracia Cristiana se apoderó del movimiento reivindicativo y transformó la lucha justa de esos obreros por mayores salarios en un arma contra el aparato de Gobierno de la Unidad Popular, para minarlo, cumpliendo con las instrucciones de los generales. El dirigente Guillermo Medina fue puesto en contacto con el periodista Manuel Fuentes Wedling, de la jefatura de la organización Patria y Libertad, y era este Fuentes el encargado de escribir los discursos de Medina, tanto en El Teniente como en Santiago (así se descubrió más tarde, después del abortado *putsch* del 29 de junio, que desarmó la jefatura de Patria y Libertad y permitió el allanamiento del domicilio de Fuentes, donde se encontraron los borradores de discursos dichos por Medina en abril y mayo).

La huelga duró más de dos meses y, durante mayo, fue transformada en el centro de un movimiento huelguístico general controlado por la Democracia Cristiana para acorralar al Gobierno. El 23 de mayo, unos veinticinco mil estudiantes pertenecientes a centros de alumnos de la Universidad de Chile controlados por el PDC paralizaron sus actividades en apoyo de los mineros de El Teniente. El mismo día, la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, también en manos del PDC, hizo igual paralización de actividades. La situación se hizo más clara ese día, cuando en Rancagua, ciudad cercana a El Teniente, grupos de choque fascistas y del PDC asolaron la ciudad, transformando una manifestación pública «en apoyo de la huelga» en un ataque con armas de fuego, pedradas y otras armas contundentes a la Intendencia de la ciudad y al local regional de los partidos comunista y socialista. El jefe de las Fuerzas Armadas de la ciudad, teniente coronel Cristian Ackercknecht, desplegó sus soldados, ¡pero en contra de los atacados!, y allanó el local del partido socialista «en busca de armas». La situación era bastante ridícula porque mientras los soldados del teniente coronel Ackercknecht entraban «a la guerra» en el local del partido socia-

lista, a pocos metros de ellos, en la calle, miembros del grupo fascista Patria y Libertad ocultaban sus revólveres bajo sus chaquetas o transformaban sus bastones de ataque en «astas de banderolas».

La acción antisocialista del jefe militar de la ciudad provocó una declaración enfurecida de la directiva nacional del partido socialista (a la cual pertenecía el presidente Allende), exigiendo la destitución de su cargo del teniente coronel Ackercknecht. Pero no ocurrió así. El comandante en jefe subrogante del Ejército, general Augusto Pinochet, envió más tropas a la ciudad, por lo cual puso al mando a un oficial de mayor graduación, el coronel Sergio Ibáñez, pero al mismo tiempo emitió una declaración pública en que decía, «en forma enfática», que «las medidas adoptadas por el oficial a cargo de la Zona de Emergencia el día 23 de mayo cuentan con mi más irrestricto apoyo, respaldo y conocimiento».

Una vez más, frente a la tamaña insolencia política del jefe del Ejército chileno, las directivas de los partidos de la Unidad Popular guardaron silencio, y los generales conspiradores siguieron montando su esquema de ocupación militar de todo el país «para una fecha no determinada».

Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo desplegado por Eduardo Frei para hacer de la huelga de El Teniente «el detonante» para la renuncia o derrocamiento de Allende, esto no ocurrió porque los generales estimaron que «no estamos preparados todavía» y porque las organizaciones populares no dominadas por el PDC respondieron con una movilización que puso en marcha, parcialmente, El Teniente.

La actuación de Manuel Fuentes Wedling, sin embargo, es importante en este episodio porque nos permite mostrar cómo, para llevar adelante la conspiración, incluso altos dignatarios de la Iglesia Católica se mezclaron en maniobras que llegaron al asesinato. Los hechos ocurrieron así:

En marzo de 1973, por orden del cura Raúl Hasbún, (secretario del arzobispo de Santiago), se instaló en Concepción un canal de televisión filial del Canal 13TV, del que él era director, sin permiso legal. El Gobierno, cumpliendo con las leyes, montó un aparato electrónico para interferir las transmisiones de ese canal pirata de televisión (el 5) en la ciudad de Concepción. El cura Raúl Hasbún, entonces, se contactó con Manuel Fuentes Wedling, de Patria y Libertad, para pedirle «ayuda» para «resolver» el problema de las «interferencias». Hasbún le pidió a

Fuentes que buscara «un grupo de personas audaces» que destruyeran las instalaciones electrónicas del Gobierno en Concepción, que estaban impidiendo que Canal 5TV saliera al aire en buenas condiciones. Manuel Fuentes reunió a Michael Vernon Townley Welch, alias «Juan Manolo», adiestrador de armamento de Patria y Libertad por cuenta de la CIA y a los chilenos Rafael Undurraga Cruzat y Gustavo Etchepare. Con ellos formó un «equipo comando» que quedó a las órdenes del cura Raúl Hasbún, el cual planificó todos los detalles para entrar en la casa de la calle Freire 382, de Concepción, en donde estaban los equipos electrónicos del Gobierno.

El «comando» entró en la casa el 18 de marzo de 1973, robó los equipos, también asesinó al cuidador de la casa, un obrero pintor de brocha gorda llamado Jorge Tomás Enríquez González.

La investigación y el juicio que pendían sobre el cura Raúl Hasbún por «autoría intelectual» de asesinato y robo con homicidio fueron interrumpidos por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, lo cual le salvó definitivamente, al menos mientras exista Junta Militar, de responder por sus conexiones con la CIA y con Patria y Libertad.

Pero no solamente eran personajes como el sacerdote Raúl Hasbún —que con sus comentarios sabatinos en Canal 13TV de la Universidad Católica atizó continuamente la hoguera de odio contra el pueblo por más de dos años—, los que actuaban en Chile por cuenta del Pentágono, la CIA y los consorcios norteamericanos.

Había senadores que, por lo menos no como Hasbún que amparó asesinos, se transformaron en contrabandistas de armas, bajo la protección del Poder Judicial y de los generales conspiradores. Es el caso del senador Pedro Ibáñez Ojeda.

Este parlamentario está conectado a un grupo oligárquico de Valparaíso, cuyo principal giro económico es la importación de maquinaria agrícola y la industria del café instantáneo (Sí Café). La firma Ibáñez Ojeda (del hermano del senador y propia) se dedica a importar principalmente desde Brasil. Pues bien, durante 1972 y 1973, el senador Pedro Ibáñez Ojeda puso a disposición de Patria y Libertad sus conexiones con la oligarquía brasileña para importar armas desde los puertos brasileños... dentro de las cajas de maquinaria agrícola y productos enviados a su firma. Este sistema de contrabando de armas para nutrir a los grupos terroristas fascistas chilenos funcionó sin problemas durante más de un año.

En realidad, el traficante de armas, senador Pedro Ibáñez Ojeda, era apenas un engranaje en una maquinaria enorme montada en Brasil para, a través de la Sociedad de Fomento Fabril Chilena, canalizar los fondos para el sabotaje de la economía chilena y la alimentación de los grupos fascistas. Grupos privados brasileños de grandes empresas, entré los que figuraban el magnate de la imprenta Gilberto Hubles, en colaboración con monopolistas de la metalurgia y la banca, utilizaron correos de envíos de dinero a Chile como Aristóteles Brumond, adscrito al equipo de la CIA en Brasil, o como el ingeniero Glaycon de Paiva, nervio motor del llamado Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES), fundado en 1961 con asesoría de Washington, para «prevenir» un levantamiento popular en las Administraciones de Janio Quadros y Joao Goulart. (Para un estudio más profundo de este IPES, ver mi libro *Estados Unidos en Brasil*, Ediciones Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1965.) Estos grupos brasileños estaban detrás, en lo financiero y en lo ideológico, de los equipos de «expertos» de la Democracia Cristiana del grupo de Frei y del Partido Nacional, en la coordinación del sabotaje político al Gobierno de Allende. Orlando Sáenz estaba en contacto permanente con los brasileños de estas organizaciones, así como con grupos similares de Argentina, Venezuela y los EE.UU.

### *Nueva insurrección militar*

En el mes de junio de 1973, la organización fascista Patria y Libertad, impresionados sus dirigentes por la efectividad de su trabajo terrorista, por la enorme penetración que habían logrado entre los organizaciones latifundistas del sur del país, y por la amplia protección que recibían de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, decidieron montar una aventura por su cuenta. El jefe de los conjurados, Pablo Rodríguez Grez, decidió montar una insurrección militar en Santiago, que, esperaba, sería como encender un barril de pólvora en todo el país, y provocaría la rápida caída de Allende, su reemplazo por una junta cívico-militar compuesta por los presidentes del Senado (Eduardo Frei), del Poder Judicial (Enrique Urrutia Manzano) y los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Rodríguez consultó con el general en retiro Roberto Viaux Marambio, preso en la Penitenciaría de Santiago desde noviembre de 1970 por el «caso Schneider», y le mostró los hechos. Por ejemplo, que los atentados terroristas marcaban un record impresionante: durante el año 1973, cinco atentados dinamiteros, a balazos, a golpes y asaltos contra personas o lugares de la Universidad Popular en enero; 29 en febrero; 28 en marzo; 57 en abril y 105 en mayo... (de esos atentados, sólo cien habían sido investigados habiendo caído presos 83 hechores... ¡Y todos habían sido dejados libres por los tribunales de justicia!); que la Corte Suprema de Justicia, a petición expresa del director del departamento de personal del Ejército, general Oscar Bonilla («hombre de Frei», dijo Rodríguez Grez, repitiendo la definición que le daban Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton en cualquier reunión social en Santiago), el 26 de mayo había enviado un oficio público al presidente Allende, sumamente insolente, en que le representaba «por enésima vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales» y le advertía «no ya una crisis del estado de derecho, sino una perentoria o inminente quiebra de la juricidad del país»; que el prestigio interno del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, estaba por los suelos; que no sólo conspiraban algunos altos mandos militares, sino también Frei, Jarpa y otros políticos de derechas; que la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, opinaba que las condiciones estaban maduras para provocar un golpe militar-civil; que los latifundistas chilenos, a través de Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, estaban de acuerdo en que había llegado el momento de derrocar a Allende; y que, por último, la organización Patria y Libertad contaba con «la lealtad» de por lo menos un regimiento de Santiago, el Blindados Número 2, ya que su comandante, el teniente coronel Roberto Souper Onfray era miembro activo de la organización fascista y, además, hermano de su dirigente regional (en Concepción) del mismo grupo.

El general en retiro Viaux Marambio (que estaba siendo protegido abiertamente por la Corte Suprema, al serle rebajada la pena de presidio de veinte años de cárcel que le correspondía por su responsabilidad intelectual en el asesinato del general René Schneider Chereau, a sólo dos años) estuvo de acuerdo con Rodríguez Grez y le dio un esquema. Según con-

tó Rodríguez Grez más tarde a Benjamín Matte, y éste, borracho, pocos días antes del intento insurreccional del 29 de junio, en su casa, a un grupo de amigos, el esquema era así: primero, provocar de algún modo un escándalo en el que el general Carlos Prats fuera el protagonista para «suicidarlo moralmente», obligando a las Fuerzas Armadas a pensar que «ya no se puede aguantar más»; y segundo, atacar La Moneda con los tanques del Regimiento Blindados, presentando a los mandos de Santiago «el hecho consumado».

Como se ve, el esquema era una especie de repetición mejorada de lo que Viaux pretendió hacer en octubre de 1970. Patria y Libertad se dio a la tarea confiando mucho en el desarrollo mecánico de las cosas, y concentró sus esfuerzos solamente en preparar los dos «detonantes»: el desprestigio de Carlos Prats y el levantamiento contra el Palacio de La Moneda de las tropas de tanques de Santiago.

En la mañana del 26 de junio, martes, comenzó a funcionar la insurrección con la complicidad de un regimiento de Santiago. Se montó un «incidente callejero» en el cual debía ser linchado, o por lo menos golpeado brutalmente por la multitud, el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. Se utilizó como señuelo a una mujer llamada Virginia Cox, cuya apariencia de hombre (esa mujer era conocida en la alta sociedad santiaguina por su lesbianismo casi «profesional») era el centro de toda cuestión. Se trataba de que a la hora de mayor concurrencia de automóviles desde el barrio alto de la capital hacia el centro, el automóvil de Prats debía ser molestado, interceptado y puesto en peligro de chocar varias veces, por otros dos automóviles, mientras, desde un tercero, Virginia Cox molestara al general hasta exasperarlo. Se esperaba que Prats creyera que la Cox era hombre (tal como ocurrió) y que arremetiera físicamente contra ella, lo cual provocaría un lío considerable en el lugar, con indignación manejada por dos hombres adiestrados para ello, que iban en los otros dos automóviles de la operación, y el general sería golpeado y, en el mejor de los casos, linchado. Toda la operación fue preparada por la CIA norteamericana, a través del periodista Manuel Fuentes Wedling, de Patria y Libertad.

Así ocurrió cerca del mediodía del martes 26 de junio. A la salida del barrio alto de Santiago, y después de que durante veinte cuadras el automóvil del general Prats fue cruzado, tocado, y a veces empujado por otros dos, y después que Vir-

ginia Cox, desde su automóvil pequeño, le hiciera muecas groseras, gestos con las manos y le gritara «viejo maricón», el comandante en jefe del Ejército interceptó al auto de Virginia Cox, sacó su pistola de reglamento, bajó de su automóvil y encañonó en la cabeza a la mujer. Sólo en ese momento el general Prats se dio cuenta que Virginia Cox no era hombre, sino mujer. Pero ya más de un centenar de personas rodeaba la escena, y uno de los provocadores trató de iniciar el linchamiento gritando: «¡General maricón, eres como Allende, sólo te atreves con las mujeres!» Sin embargo, por una casualidad, estaba en el grupo un chófer de taxi que cogió al general Prats de un brazo y a tirones lo metió en su taxi y lo llevó al Ministerio de Defensa. Más tarde, el chófer declaró a los periodistas: «Me di cuenta de que la gente quería linchar al general. Si no lo saco, lo matan. Habían tipos que le dieron de empujones, le gritaban de todo y azuzaban a los demás para que hicieran lo mismo... Para sacar mi taxi tuve que meter el acelerador a fondo y empujar a varios que querían obstruirnos el paso.»

Pero el automóvil del general Prats quedó en el lugar. Desinflaron las llantas y escribieron, con pintura amarilla, en el parabrisas y el techo, las palabras «generales gallinas» y «Prats maricón». En el lugar de los hechos estaban, desde el principio, periodistas de la radioemisora Minería, perteneciente a la oligarquía industrial, y de «El Mercurio». Los periódicos, radios y cadenas de televisión de la reacción informaron del suceso, desde la tarde misma del 26 en el sentido de «general Prats ataca a una mujer que le sacaba la lengua», y afirmando con sus crónicas la tesis de ser «un cobarde», una persona que «no puede ser jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas».

Al día siguiente, miércoles 27 de junio, en la página dos del diario «El Mercurio», apareció un larguísimo artículo firmado por Carlos Vicuña Fuentes, un anciano intelectual reaccionario, titulado *Un llamado a la Gente Sensata*. El artículo decía, en síntesis, que «el país ya no aguanta más la situación actual», nuestras Fuerzas Armadas son la reserva moral que debe salvar la República», es «necesario que un Gobierno militar tome las riendas de la nación» y «después de pasado un tiempo prudente, entregue el mando a un grupo selecto de personas probadamente sabias e inteligentes».

El mismo día, en el casino de oficiales del Regimiento Blindados Número 2, un capitán trató de convencer a sus compa-

ñeros oficiales que «debemos ir a la Comandancia en Jefe con los tanques, para pedir la salida del maricón de Prats y la renuncia de Allende». El capitán fue arrestado por los miembros del Servicio de Inteligencia de la unidad y llevado al Ministerio de Defensa. Al día siguiente, 28 de junio, el comandante de la unidad, teniente coronel Roberto Souper Onfray, comunicó al equipo dirigente de Patria y Libertad que «la comandancia me ha relevado de mi cargo, mañana tengo que entregar el mando al coronel Ramirez, ¿qué hago?»

Pablo Rodríguez Grez y Benjamín Mette le dijeron que insurreccionara la unidad. El día 29 de junio, a las nueve de la mañana, después de un baleo en el interior del regimiento contra oficiales que se opusieron (murieron 8 militares), a bordo de seis tanques Sherman, el regimiento Blindados Número 2 rodeó La Moneda, asaltó el Ministerio de Defensa y liberó al capitán apresado el día 27. Pero, la insurrección había cometido un pequeño error: Salvador Allende NO estaba en el Palacio de Gobierno; estaba en su residencia del barrio alto, al otro extremo de la ciudad, en la calle Tomás Moro.

Desde las nueve a las once de la mañana, espacio en el cual los tanques de Souper dispararon más de quinientos tiros, los conjurados de Patria y Libertad y el propio teniente coronel Souper esperaron en vano que «los detonantes» montados desde el día 26 surtieran su efecto. Ningún otro regimiento de Santiago se plegó al asedio de La Moneda. Ninguna radio fue tomada por efectivos militares. Ni Eduardo Frei, Presidente del Senado, ni Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema dijeron nada. ¿Qué había pasado?

Había pasado que los generales y almirantes conspirados no tenían seguridades todavía de que Augusto Pinochet, segundo general del Ejército, estuviera totalmente convencido de la operación derrocamiento; aun cuando la «estrategia general del derrocamiento» estaba terminada, según estudios de los generales Sergio Arellano Stark, Herman Brady Roche, Gustavo Leigh y el vicealmirante José Toribio Merino, ocurre que no se habían iniciado conversaciones con el general César Mendoza Durán, de Carabineros (aun cuando se le eligió a él como «contacto», ya a fines de marzo, los generales postergaron las conversaciones hasta poder presentarle un cuadro militar completo, y eso en junio todavía no ocurría), y que no había sido terminado el esquema de acción en Santiago, que debía coordinarse con una intensa «campana política a partir

de julio, para desembocar en septiembre» que colocara a Allende en la «ilegalidad» a los ojos del Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría.

Entonces, cuando el general Carlos Prats, por orden de Allende, se fue a la Escuela Militar de Santiago, a las nueve y cuarto de la mañana del 29 de junio, «para sofocar el motín», se encontró con que «los generales están reunidos discutiendo la situación». Sólo una hora y quince minutos después, los generales, sin la presencia de Prats, estuvieron de acuerdo en «sofocar el motín». Carlos Prats (sin saberlo) a la cabeza de los generales conspiradores, se dirigió a los distintos regimientos de Santiago, para hacerlos salir a sofocar el levantamiento.

El general Prats se dirigió a la Escuela de Suboficiales porque estaba comandada por el coronel Julio Canessa Roberts, elemento ultrafascista cuyos pasos conocimos en capítulos anteriores. El general Augusto Pinochet se puso a la cabeza del Regimiento Buin, cuyo comandante era «constitucionalista». El general Óscar Bonilla fue enviado al regimiento sublevado, el Blindados Número 2, por recomendación de Orlando Urbina Herrera, Inspector General del Ejército y con grandes ambiciones de ser «líder» de un movimiento «militar reformista» que reemplazara a Allende. La recomendación se justificaba porque Bonilla, «duro» y conspirador, era una de las pocas personas capaces de convencer a los sublevados del regimiento para que depusieran las armas «esperando una ocasión propicia».

Más tarde, de camino a La Moneda, al general Prats se sumó el general Guillermo Pickering, «reformista», jefe de los Institutos Militares; mientras, el jefe de la guarnición de Santiago, el general «reformista» Mario Sepúlveda Squella, ordenaba que la Escuela de Infantería (al mando de un coronel «constitucionalista»), la Escuela de Telecomunicaciones (al mando de un coronel «duro») y la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales (al mando de un teniente coronel «reformista») avanzaran desde el noroeste y el sur hacia La Moneda.

El general Prats había pedido a Salvador Allende que ordenara a las Fuerzas de Carabineros retirarse del escenario de la operación de «cerco» de los amotinados. Allende accedió y limitó la acción de Carabineros a cuidar su residencia de Tomás Moro.

En un esfuerzo desesperado, los fascistas de Patria y Libertad dinamitaron la planta transmisora de Radio Portales, del

partido socialista. Pero ya no había nada que hacer. A las once y media de la mañana, los insurrectos se rindieron en las propias calles adyacentes a La Moneda, mientras tres tanques al mando del teniente coronel Souper escapaban hacia la sede del regimiento Blindados Número 2, para rendirse ante el general Óscar Bonilla.

Pablo Rodríguez Grez, Benjamín Matte, y otros dirigentes de Patria y Libertad se refugiaron en la Embajada del Ecuador.

A las ocho de la noche de ese mismo viernes, frente al Palacio de La Moneda, el presidente Allende convocó al pueblo para dar «un informe sobre los hechos». Los obreros reunidos, unos veinte mil, gritaban consignas como «armas para el pueblo», «crear poder popular», «a cerrar el Congreso», «fuera de Chile los yanquis, ahora».

Allende hizo un discurso que finalizó con este párrafo: «Mañana, de nuevo las usinas a levantar su humo para saludar a la patria libre; de nuevo al trabajo a recuperar las horas que significó el paro del jueves; mañana cada uno a trabajar más, a producir más, a sacrificarse más por Chile y por el pueblo... Compañeros trabajadores: tenemos que organizarnos. Crear y crear el Poder Popular, pero no antagónico ni independiente del Gobierno, que es la fuerza fundamental y la palanca que tienen los trabajadores para avanzar en el proceso revolucionario».

Grupos de trabajadores, esa noche, se fueron caminando hacia sus casas gritando eufóricos: «¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!»

### *Larga reunión*

A la mañana siguiente del 29 de junio, se reunieron casi todos los generales de la guarnición de Santiago, agrupados bajo el liderato de Herman Brady, Mario Sepúlveda, Guillermo Pickering, Sergio Arellano Stark, Javier Palacios y Óscar Bonilla. Se leyó un informe del SIM que decía que «entre las nueve y las once de la mañana», en los cordones industriales de Los Cerrillos y Vicuña Mackenna, se había reunido un contingente de más o menos diez mil obreros, en preparación para avanzar al centro de Santiago a combatir con las tropas blindadas amotinadas». Se estableció que el «amotinamiento» había sido «causado por la mala influencia de personas civiles sobre nuestros mandos», y que «esta situación da una mala

imagen de la cohesión del Ejército». Se acordó instruir a todos los mandos de unidades en el país «suspender todo tipo de contacto con la organización Patria y Libertad» y «mantener informado al Estado Mayor, cotidianamente, de lo que ocurra en las áreas de jurisdicción respectiva». Se dio un instructivo general a todo el aparato central del Ejército de «constante alerta», de «aumentar el ritmo de los allanamientos de fábricas y sedes de partidos de la Unidad Popular y de la Central Única de Trabajadores, para limpiar la población civil insurreccional de elementos bélicos». Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de comenzar «una educación rápida y sistemática de la tropa y suboficiales, con charlas y pequeñas reuniones lideradas por oficiales de alta graduación en las que se señale terminantemente que la Patria está en peligro, que los marxistas preparan una invasión del país con ayuda peruana y que está llegando la hora de dar la vida por la nacionalidad 'chilena'».

(En varios regimientos de Santiago, desde julio en adelante, diversas compañías eran despertadas en la madrugada, se las llevaba al salón de proyección de cine, se les hacía ver películas sobre la lucha de la selva en Vietnam, concluyendo con una pequeña charla sobre «el peligro comunista mundial contra nuestras mujeres, hijos y padres», y se lograba, así, mantener constantemente con los nervios en tensión a parte de la tropa.)

La reunión de la mayoría de los generales de la guarnición de Santiago en la mañana del sábado 30 de junio, fue sólo el primer paso de una decisión tomada apresuradamente por los altos mandos en el círculo más íntimo de la conspiración. Esa misma tarde, los generales Óscar Bonilla y Sergio Arellano Stark fueron designados por acuerdo de Herman Brady Roche, Mario Sepúlveda Squella, Javier Palacios, Orlando Urbina Herrera y Guillermo Pickering para conversar con el general Augusto Pinochet, ponerlo en antecedentes de lo que se tramaba y pedirle que se sumara a la conspiración como «el líder del Ejército».

Las reuniones con Pinochet duraron toda la tarde del sábado 30 de junio, parte del domingo primero de julio y la mañana del lunes 2. De acuerdo con informaciones filtradas posteriormente, en esos tres días, al parecer, se fijaron los detalles ideológicos más importantes del golpe militar en gestación, incluyendo la necesidad de sacar del cuadro de la socie-

dad chilena a todos los partidos políticos, para «poner en práctica la patriótica tarea de limpiar el cerebro de los chilenos, infiltrados de la ideología marxista».<sup>11</sup>

La decisión de Pinochet de sumarse a la conspiración, aceptando el ofrecimiento de ser «el líder de la operación», fue comunicada con alborozo al general Gustavo Leigh Guzmán y al vicealmirante José Toribio Merino. El primer fin de semana de ese mismo mes, la misión norteamericana en el Ministerio de Defensa chileno también fue informada de que el círculo conspirativo se había cerrado al más alto nivel. En la segunda semana de julio, el general Oscar Bonilla fue encargado de conversar con el general de Carabineros César Mendoza Durán para sumarlo a la conspiración. Mendoza Durán aceptó sólo después que se le aseguró que formaría parte de la posible Junta Militar de insurrectos, desplazando a su superior en Carabineros, José María Sepúlveda Galindo.

Así, la primera mitad de julio de 1973, fue una época de júbilo en el Pentágono norteamericano al comprobar que «sus generales» en el Ejército chileno estaban articulando un esquema golpista de enorme magnitud.

### *Los peones*

En las conversaciones del general Augusto Pinochet con los generales en contacto directo con el Pentágono, se acordó presionar a los dirigentes políticos Eduardo Frei y Onofre Jarpa y a los jueces de la Corte Suprema para acelerar una campaña intensa de desprestigio «constitucional» del presidente Allende, y de llegar a una situación de «opinión pública» en que «no hubiera dudas para el común de los chilenos, que los militares chilenos tenían que derrocar a Allende para *volver a la legalidad*».

La maquinaria militar para poner en movimiento a los políticos funcionó de manera increíblemente eficaz. Los deseos de Eduardo Frei y de Onofre Jarpa de provocar un golpe militar para después quedar, uno de ellos, como nuevo presidente de Chile, fueron una tierra sumamente abonada en donde germinó la semilla de los generales que querían «salvar» a Chile por cuenta del Pentágono.

En la misma primera semana de julio, y al parecer por idea del general Augusto Pinochet, muy preocupado por los

resultados electorales imprevistos de las elecciones de marzo de 1973, se acordó pedir «a los contactos civiles» una investigación «que demuestre» que en marzo de 1973 hubo «un gigantesco fraude». Con eso, esperaban los generales, se pondría en duda todavía de manera mucho más fuerte, la «legitimidad» del Gobierno de Allende. Esta tarea recayó en el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Jaime del Valle, simpatizante del grupo fascista Patria y Libertad.<sup>12</sup>

En poco menos de dos semanas, estuvo «listo» el «estudio científico» de Jaime del Valle y un equipo de ingenieros dirigidos por Santiago Morán, ligado a la oligarquía metalúrgica chilena. El encargo de los generales había sido cumplido. El «estudio» decía (basándose en 29 casos de fallas de inscripción electoral, en un total de más de tres millones de votantes) que «el Gobierno había cometido fraude en marzo de 1973», «falsificando» por lo menos 400 mil votos. Pero, lo importante, era que el «documento» terminaba así:

«Podemos sostener, entonces, que nuestra democracia está hoy quebrada. Nuestro régimen electoral ha permitido un fraude gigantesco y no da garantías de que en futuras elecciones no se vuelva a repetir... Es evidente que en una coyuntura de esta naturaleza, el pueblo chileno se enfrenta con una tarea de gran envergadura que ya no puede eludir. *Esta es la de reconstruir la democracia creando la nueva institucionalidad que la garantice eficazmente.*»

¡Era la idea que los generales querían ver escrita en ese informe! La idea, metida en la cabeza de miles de chilenos a través de la repetición de «documentos» como éste en diarios, revistas, radios y canales de televisión: había que crear «una nueva institucionalidad». Tarea, por supuesto, reservada a los militares.

El 8 de julio, el presidente del Senado, Eduardo Frei, hizo pública una declaración que la noche anterior había sido revisada por los generales Oscar Bonilla y Sergio Arellano Stark. La declaración la firmaba también el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, del mismo partido que Frei, y empresario ligado al monopolio de la locomoción colectiva particular de Santiago. El documento decía: «Es un hecho que Chile atraviesa por una de las más graves crisis en el orden político, económico, social y moral que ha conocido en su historia». Más tarde agregaba detalles parciales de la situación po-

lítica y señalaba «a esto se agrega un proceso organizado de odio y violencia que divide al país». (Por supuesto, sin mencionar la campaña de prensa de la derecha chilena, que calificaba cotidianamente a Allende de «borracho» y «maricón», que acusaba al general Pratts de «vendido por unos dólares más», que pedía a los chilenos que se sumaran a la teoría de que «el mejor marxista es el marxista muerto»; y tampoco no mencionaba el sabotaje a la economía chilena de parte de los organismos financieros de los Estados Unidos, del propio Frei, de la oligarquía chilena; ni la ola de sabotajes dinamiteros, a balazos y a golpes de las organizaciones fascistas, que habían elevado la marca en junio a 115 atentados. Más tarde, en junio, llegarían a 128 y en agosto a 300 mensuales.)

Y en un ejemplo realmente brillante de cinismo, la declaración Frei-Pareto, encargada por Bonilla-Arellano, afirmaba: «Los sectores democráticos que representamos no están armados. Ellos han confiado en que la seguridad interna de Chile está en manos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, conforme a lo dispuesto en la Carta Fundamental y a una tradición quebrantada. Esta situación es aún más incomprensible si se considera que el Gobierno asegura contar con la lealtad de esos Institutos y que el país está tranquilo y que él controla la situación.»

Y agregaba que «nos parece fundamental» que el Gobierno «promulgue en su totalidad la Reforma Constitucional despachada por el Congreso» (se trataba del proyecto Hamilton-Fuentealba, que congelaba el área de propiedad social, reducía su alcance y significaba la destrucción del programa económico de la Unidad Popular).

### *Un asesinato*

La situación se deterioraba por momentos en julio de 1973. Según datos incompletos, entre enero y mayo de 1973, el capital especulativo en manos de la oligarquía nacional había llegado a la enorme cifra de 250 millones de dólares, con lo cual hicieron trizas el ya debilitado equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes de consumo. La restricción en la reinversión de capital, según un pre-estudio de la Sociedad de Fomento Fabril, iba a llegar, en los primeros seis meses de 1973, a porcentajes superiores al 50 %.

También, a esa altura de la situación, al sabotaje económico se sumó una intensa campaña para denunciar la ineptitud demostrada por un número de funcionarios estatales de los partidos de izquierda encargados de administrar «el área de propiedad social», es decir, las empresas estatizadas. Estos funcionarios, conocidos como «interventores», hicieron de la corrupción y la inepticia administrativa un arte, provocando descalabros sectoriales en la producción. Los oligarcas y los imperialistas norteamericanos se aprovecharon de esta realidad parcial para presentar la fábula económica de que «el marxismo» había desmoronado el sistema productivo chileno y que, por lo tanto, «el socialismo» no servía para Chile y había que reemplazarlo por un Estado fascista corporativo.

Las cifras del alza del costo de la vida, que reflejaban la escalada del sabotaje económico reaccionario e imperialista y la incapacidad de algunos sectores de la Unidad Popular para manejar la situación, eran las siguientes:

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| diciembre de 1970 a diciembre de 1971. . | 22,1 %  |
| diciembre de 1971 a diciembre de 1972. . | 163,4 % |
| enero de 1972 a enero de 1973 . . . . .  | 180,1 % |
| mayo de 1972 a mayo de 1973 . . . . .    | 238,5 % |

Esto significaba que en los primeros cinco meses de 1973, la inflación iba saltando a un promedio mensual de 14,6 %. Después fue peor. Las cifras para julio de 1973, en relación con el mismo mes del año anterior, daban un índice increíble de 323,6 % de inflación anual, el mayor del mundo. Esto quería decir que el promedio mensual había subido a 42,55 %. Según esto, la perspectiva para diciembre de 1973 era de una inflación anual de 500 %.

Con este paisaje de fondo trabajaban los diversos círculos conspiradores de la derecha, pero con contradicciones entre sí.

El punto de vista de la Democracia Cristiana, encabezada por Frei, era distinto al del Partido Nacional, encabezado por el senador Onofre Jarpa. Mientras Frei se debatía en el dilema de utilizar a las Fuerzas Armadas como «disuasivo» contra Allende y, en el caso de llegar a un apoyo cierto para una dictadura militar, maniobrar para que los generales dejaran el poder lo más pronto posible en manos de civiles (en las manos de Frei, por supuesto), la posición del nacional Jarpa era más dura.

Jarpa estimaba que «la única salida posible para mantener la paz social por largo tiempo, es una dictadura militar». Por eso, todos sus esfuerzos eran para empujar a los generales y almirantes por este camino.

Esto provocaba una contradicción y muchas fricciones en la oposición. Sobre todo porque el grupo de Frei tenía conversaciones secretas con Allende, para «llegar a un entendimiento», a un acuerdo con el partido demócratacristiano para congelar las reformas, desviar el inmenso caudal revolucionario que se acumulaba en las filas de los trabajadores en todo el país, y detener la posibilidad de que los militares se sintieran tentados de dar un golpe militar y quedarse «para siempre» en el Gobierno, como ocurrió en Brasil en 1964.

Esto, naturalmente, se reflejaba también en el seno de los altos mandos militares, sobre todo en el Ejército, pilar fundamental de cualquier insurrección militar. A mediados de julio de 1973, ya estaba claro en el seno de los generales del Ejército el acuerdo por «terminar con el proceso Unidad Popular», pero no estaba nada de claro el «cómo». El general Carlos Prats, comandante en jefe, había acuñado la tesis de un gobierno Allende-FF.AA., con la firma de una «paz política» con la Democracia Cristiana y la participación restringida del Partido Comunista de Chile y una parte del socialista, basando su argumentación en que «sólo así impediremos que los trabajadores más extremistas se insurreccionen». A esta tesis se adherían los generales Joaquín Lagos Osorio, Herman Brady Roche, Washington Carrasco Fernández, Héctor Bravo Muñoz, Mario Sepúlveda Squella, Guillermo Pickering y Orlando Urbina Herrera pero con variantes. Mientras Lagos Osorio no hacía objeciones al plan Prats, lo mismo que Orlando Urbina Herrera; los otros cinco generales decían que el Gobierno «transitorio» debía ser solamente con Allende-FF.AA., por «un tiempo corto», para preparar las condiciones para implantar un Gobierno «puramente militar» y poner en ejecución los acuerdos del Pentágono. Los generales Óscar Bonilla, Sergio Arellano Stark y Javier Palacios, en cambio, encabezaban otro grupo, al que se había sumado Augusto Pinochet. En éste se consideraba que la etapa de gobierno Allende-FF.AA era innecesaria.

Con este último grupo estaban los generales César Ruiz Danyau y Gustavo Leigh Guzmán; y los almirantes José Toribio Merino, Horacio Justiniano, Sergio Huidobro, Patricio Carvajal y Pablo Weber.

Solo, pugnando por ser el «líder de la sublevación», estaba el general Manuel Torres de la Cruz, que era el único que decía que «tenemos que operar ahora, de inmediato».

Fue con este marco cuando José Toribio Merino, jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, ordenó a un grupo del Servicio de Inteligencia Naval asesinar al edecán naval del presidente Allende, comandante Arturo Araya Peters. Tarea que se puso en práctica el 26 de julio de 1973, con todos los detalles que ya he relatado anteriormente, en el primer capítulo de este libro.

Este asesinato ordenado por los conspiradores de la Marina, permitió a los servicios de contrainteligencia del partido socialista, detectar un plan del Partido Nacional, en combinación con la Agencia de Inteligencia a través del Comando de Ex Cadetes, para asesinar al presidente Allende. La CIA, después de su error que llevó a Patria y Libertad a intentar la insurrección militar del 29 de junio, estimó que solamente el asesinato de un «pez gordo» podía provocar el caos necesario para que los militares se «movieran». El 27 de julio, viernes, los servicios de contrainteligencia socialistas descubrieron que había movimientos en el Partido Nacional, en relación con una «gran operación» para el 4 de septiembre de 1973, que tenía como objetivo asesinar a Salvador Allende. El plan se descubrió por las infidencias de un parlamentario ligado estrechamente a los grupos fascistas cuando, en la noche del 27 de julio, dijo en una casa particular que «el asesinato de Araya (el edecán naval, ocurrido la noche antes) puede echar a la basura nuestros propósitos». El parlamentario se mostró preocupado por la conmoción nacional que provocaría el asesinato del edecán naval (él no sabía que había sido planificado por el Servicio de Inteligencia Naval), ya que las investigaciones para descubrir a los asesinos podrían levantar la tapa con respecto a la muerte de Allende.

El primero de agosto, Allende denunció esto al general Carlos Prats, y el comandante en jefe del Ejército informó a su cuerpo de generales. Los generales estuvieron de acuerdo en que era «una aventura» el asesinato de Allende, y tomaron medidas para desbaratar el plan a través del SIM. Una vez más, la CIA se embarcaba en cosas no aprobadas por el Pentágono y entorpecía los planes de los generales.

Veinte días más tarde, sin embargo, como vimos en el primer capítulo, los generales en contacto con el Pentágono cambiaron de opinión y decidieron asesinar a Allende, pero simulando un

suicidio, después de haberse hecho cargo de todo el país por medio de una ocupación militar a sangre y fuego.

El asesinato del edecán naval de Allende precipitó las cosas desde el ángulo de los conspiradores civiles, que estimaron que era el momento de desencadenar «un nuevo paro de octubre». El mismo 27 de julio los dueños de camiones de todo Chile comenzaron un paro, alegando que «no se han cumplido los acuerdos por los cuales suspendimos la huelga de octubre de 1972». Tres días más tarde, León Vilarín, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Chile, declara que «este paro termina cuando se acabe el Gobierno de Allende». En Santiago, ese mismo día, Frei conversa con un grupo de amigos, en su casa, y les dice que su indecisión ha terminado, que «creo que sólo las Fuerzas Armadas pueden salvar a Chile».

El martes 31 de julio, el general Carlos Prats se reúne con 250 oficiales de la guarnición de Santiago, para discutir, por iniciativa de los oficiales, «la situación política, la grave crisis económica y las amenazas de sectores obreros contra las Fuerzas Armadas». Los 250 oficiales le piden a Prats que le diga al presidente Allende que «los oficiales del Ejército creen que si no se llega a un acuerdo con la Democracia Cristiana, y si no se incorpora a las Fuerzas Armadas el manejo total del área de propiedad social y se declaran fuera de la ley los corodones industriales, entonces, tendrán que actuar los militares».

Allende contrarresponde sacando a relucir los documentos que tenía sobre la complicidad de altos jefes navales en el asesinato del edecán Araya Peters, y pretendiendo dar un golpe de efecto —como se relata en detalle en el primer capítulo de este libro—, obliga a los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros a aceptar cuatro ministerios en su Gabinete, que comienza a funcionar el 9 de agosto como «la última oportunidad».

El día anterior, 8 de agosto, el Colegio de Abogados de Chile, dirigido por Alejandro Silva Bascuñán, magnate de las finanzas, emite una declaración siguiendo la campaña pedida por los generales conspiradores. En ella dice que se dirige a la opinión pública «en cumplimiento del deber de conciencia de movilizar a los más amplios sectores ciudadanos frente al quebrantamiento del Estado de Derecho y del ordenamiento institucional que ha sido orgullo de los chilenos».

Llama a apoyar todo lo que signifique debilitar al Gobierno constitucional.

Veinticuatro horas antes de la declaración del Colegio de Abogados, el martes 7 de agosto en la noche, los militares golpistas del alto mando de la Marina, habían decidido poner en marcha la idea de su vicealmirante José Toribio Medina, de presentar el golpe militar que se preparaba como una «respuesta» a un pretendido «golpe rojo». Los Servicios de Inteligencia de la Marina habían detectado una reunión pedida por alrededor de 200 suboficiales y marinería, en Talcahuano, para denunciar que desde el mes de junio, los mandos de los buques de la armada dirigían arengas a la tripulación, en alta mar, diciéndoles que «es necesario sacar de la Moneda al marxista Salvador Allende», «los marinos tenemos el deber patriótico de derrocar el actual Gobierno». Altamirano, junto con Miguel Henríquez, secretario general del MIR, y Óscar Garretón, del MAPU, explicaron a los suboficiales y marineros la situación política chilena y el peligro que representaban los oficiales fascistas, cuyas actuaciones estaban al servicio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional. Plantearon la necesidad de hacer conciencia entre la marinería que «no se debe obedecer a los oficiales fascistas» si éstos ordenan un alzamiento contra el Gobierno.

El vicealmirante Merino y sus asesores del Servicio de Inteligencia estimaron que con ello tenían material suficiente para montar un «golpe rojo» en la Armada, y el 7 de agosto anunciaron oficialmente que se había descubierto una «subversión» en los buques de guerra «Almirante Latorre» y «Blanco Encalada», dirigida por Altamirano, Henríquez y Garretón. Se anunció el arresto de medio centenar de marineros y suboficiales, encabezados por un cabo de apellido Cárdenas.

En los días siguientes, los reporteros de los diarios de izquierda lograron saber cómo, en las bases navales de Talcahuano y Valparaíso, estos marineros estaban siendo obligados a firmar confesiones absurdas mediante procedimientos brutales, que horrorizaron a la opinión pública. Se descubrió en el Hospital Naval de Valparaíso a un marinero al cual le habían sido reventados, a golpes, los testículos. Esposas de los detenidos relatan las torturas y se logra establecer tres tipos de ellas:

a) Un tambor de petróleo abierto, lleno de orines y excrementos humanos, es utilizado para sumergir la cabeza del «interrogado» hasta el punto de la asfixia, cada vez que se niega

a responder o a reconocer alguna culpabilidad que los interrogadores quieren.

b) Colgados los prisioneros boca abajo, con las piernas abiertas, de una barra para hacer gimnasia, desnudos, reciben golpes con una fusta en el escroto, en el nacimiento de los testículos.

c) Los prisioneros son obligados a arrastrarse, desnudos, por una «piscina» llena de piedras quebradas a martillo, sobre la cual, a treinta o cuarenta centímetros del suelo, hay una fuerte malla de acero que impide levantarse. Los prisioneros deben reptar entre la malla y las piedras filudas, varias veces, durante los interrogatorios.

Los familiares de los marineros presos dan nombres de capitanes del Servicio de Inteligencia Naval a cargo de las torturas, y se publican.<sup>13</sup>

Esto sirve para agudizar los deseos de enormes sectores del pueblo de organizarse para «impedir la insurrección militar». Periódicos como el «Puro Chile» y «Noticias de Última Hora» se destacan por sus investigaciones sobre este suceso, además de dar a conocer hechos vergonzosos ocurridos durante el motín militar del 29 de junio, en que los soldados que ocuparon los edificios adyacentes al Palacio de La Moneda, saquearon los bolsillos y los escritorios de los empleados de esas oficinas públicas. Incluso se descubren verdades hilarantes como la del edificio de Tesorería, al lado oeste de Palacio, donde los soldados saquearon dinero, relojes, anillos de oro de los empleados y... ¡dos quesos y cuatro sandwiches que tenían para almorzar!

La presión sobre los políticos civiles comienza a ser más fuerte. El grupo de Gustavo Leigh, César Mendoza y José Toribio Merino, el día 20 de agosto, después del fracasado *putsch* del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz, ya había acordado el asesinato de Salvador Allende, y el 21 reciben la buena noticia:... Eduardo Frei ha manejado la situación muy bien y en no más de 48 horas se tendrá un acuerdo de la Cámara de Diputados declarando la «inconstitucionalidad» del Gobierno de Allende y conteniendo un «texto» tal como lo pidieron los generales Bonilla y Arellano Stark.

En realidad, el acuerdo sería aprobado el 22 de agosto, pero los generales en contacto con el Pentágono ya lo tenían el día 21 en su poder. En su parte fundamental decía que la Cámara acordaba «representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento

del orden constitucional y legal de la República», y les decía a los comandantes en jefe que eran ministros: «representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde PONER INMEDIATO TÉRMINO A TODAS LAS SITUACIONES DE HECHO REFERIDAS que infringen la Constitución y las leyes»...

Ese mismo día 21 de agosto, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional organizan una manifestación de «mujeres», frente a la casa del general Carlos Prats, ministro de Defensa todavía, para pedirle que se vaya y que deje a los demás generales «crear el poder militar». La manifestación había sido pedida por los generales en contacto con el Pentágono para «ablandar el ánimo» del general Prats, ya que habían acordado enviar al general Óscar Bonilla a la casa del comandante en jefe titular del Ejército, para pedirle «en nombre del cuerpo de generales, que renuncie... porque usted es una vergüenza para nuestra institución, por su apoyo demasiado leal al Gobierno de Allende». Bonilla tenía el encargo, además, de decirle a Prats que no podía resistirse porque «tenemos todas las medidas tomadas para limpiar de una vez la honra de nuestras Fuerzas Armadas».

Pero, dejemos que relate ese gravísimo momento el economista español Joan Garcés, asesor personal de Allende y testigo directo de estos hechos, según lo hizo en un documento a la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de octubre de 1973:

«El día martes, la derecha organiza una manifestación de mujeres ante la casa del ministro de Defensa. Las mujeres le insultan soezmente y le exigen que abandone las filas del Ejército. El servicio de Inteligencia fotografía a las esposas de seis generales y de otros altos oficiales. Esa tarde, el general Prats, enfermo y en cama, es visitado por el general Bonilla —hombre de Frei, cuya mujer se encontraba entre los manifestantes— quien le aconseja que renuncie como comandante jefe titular del Ejército. Pocos minutos después de la partida del general Bonilla llega el presidente Allende a casa del general Prats. Este le manifiesta su impresión de que en el Ejército se está tramando una traición, y conversa con el Presidente sobre las medidas adecuadas para hacerlo fracasar.

»De regreso a su residencia particular, el Presidente recibe la visita del ministro del Interior y del general subrogante de Carabineros, general Urrutia. Tiene invitados a comer a varios generales del Ejército y, al frente de ellos, Augusto Pinochet. Objeto de las conversaciones: medidas contra el golpe de Estado en gestación. Pasada la medianoche, el Presidente convoca a los dirigentes de los partidos de la coalición de Gobierno y de la Central Unica de Trabajadores, para manifestarles que, ante la gravedad de la situación militar, de acuerdo con los altos mandos del Ejército, ha resuelto llamar a retiro a los generales complicados en el intento de golpe. En previsión de que el ejercicio de sus facultades constitucionales de llamar a retiro a los generales que han perdido su confianza provoque una revuelta militar, manifiesta que el alto mando del Ejército ha estudiado la articulación de un plan de defensa del Gobierno con la colaboración de las fuerzas regulares y sindicatos obreros. Cerca de las dos de la madrugada, el Presidente es informado de que acaba de llegar el alto oficial que tiene que ultimar con el Gobierno y la Central Unica de Trabajadores el plan de defensa antigolpe para el día siguiente. Yo mismo vi a ese general. Se llama Augusto Pinochet».

Este relato de Joan Garcés nos revela cómo la ingenuidad política de altos dirigentes de la Unidad Popular, incluyendo al presidente Allende, permitió que «el líder de la insurrección militar», por acuerdo de los altos mandos en contacto con el Pentágono, conociera todo el despliegue de las fuerzas obreras en Santiago, como «responsable» de un plan de defensa antigolpe... Del golpe que él mismo estaba articulando en conjunto con la Marina, Aviación y Carabineros.

Al día siguiente, 22 de agosto, el general Prats reunió a los generales integrantes de la junta institucional, y les pidió que redactaran una declaración de «desagravio» a su persona y cargo, por la manifestación de las mujeres del día anterior. De los 22 generales presentes, dieciocho se negaron a hacerlo seguramente para evitar sospechas de Prats; los generales Pinochet, Brady, Sepúlveda y Pickering votaron a favor de la petición de Prats.

De inmediato, el general Prats concurre a La Moneda y presenta la renuncia a Salvador Allende. Leamos lo que dice Joan Garcés en el documento que citamos anteriormente:

«Ante esta situación, el general Pinochet manifiesta al presidente Allende que es conveniente aceptar la renuncia del gene-

ral Prats, como una medida para apaciguar las exigencias en su contra de la Aviación y la Marina. A cambio del retiro del general Prats, Augusto Pinochet se compromete a asumir la Comandancia en Jefe titular del Ejército, y llamar a retiro esa misma semana a seis generales implicados en la preparación del golpe de Estado. Encabezando la lista el general Bonilla, hoy su ministro del Interior».

El 23 de agosto, el general Prats deja de ser comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa. Acogido a retiro, escribe una carta pública de renuncia al Jefe del Estado, en un gesto de nobleza, previniéndolo que «renuncio porque ya no puedo detener» las fuerzas golpistas. Es decir, avisa a todo Chile que el golpe militar está en marcha. Pero su carta tiene poco eco.<sup>14</sup>

El 23, en la tarde, en una reunión de generales conspiradores, los generales Sepúlveda y Pickering, reciben las instrucciones para movilizar las tropas de Santiago en el «día D» (todavía no fijado y puesto tentativamente a partir de septiembre). En ese momento, Pickering y Sepúlveda se enteran que el golpe se dará sobre la base de «dar de baja» a unos seis mil dirigentes medios sindicales, políticos y de masas en las primeras horas del golpe, destruir concentraciones obreras y poblaciones humildes con fuego de tanques y aviación, y que se calcula que «con unos cincuenta mil muertos en los primeros tres o cinco días de combate habremos limpiado el terreno». Más que eso, cuando protestan indignados por esta táctica de asesinato y destrucción, de algún modo se enteran del plan para asesinar al presidente Allende y reciben instrucciones de no hablar con nadie porque «ni siquiera Pinochet» lo sabe. Pickering y Sepúlveda presentan sus expedientes de retiro del Ejército de inmediato, y el día 24 dejan de pertenecer a las filas. Al mando de la guarnición de Santiago y de la Segunda División es nombrado el general de brigada Herman Brady Roche y, de hecho, el general Sergio Arellano Stark reemplaza a Pickering.

Mientras tanto, Pinochet se las arregla con Allende para no despertar sospechas y no pedir el retiro de los generales metidos en la conspiración. Joan Garcés lo cuenta así:

«En los últimos días de agosto el propio general Pinochet pide al Presidente de la República postergar el retiro de los generales golpistas para la Junta Calificadora del Ejército, a celebrar en la segunda mitad de septiembre. Justificación: ésta sería una resolución «institucional» interna, que él impondría como comandante en jefe. Con ello se preservaría al Presiden-

te de la crítica de querer retirar a generales por motivos políticos. Personalmente, en el transcurso de la última semana de agosto y primera de septiembre, tuve ocasión de escuchar en varias oportunidades al presidente Allende reiterar cómo pensaba frente al movimiento militar subversivo que se sentía a punto de estallar. Yo participé en su última reunión de trabajo antes de su masacre, el 10 de septiembre. Estaban presentes en ella otros tres colaboradores del Presidente. En esa oportunidad, el Presidente reiteró que en las Juntas de Calificación Ordinaria que debían tener lugar en las semanas siguientes, de acuerdo con los comandantes en jefe, iba a ejercer definitivamente sus facultades legales para llamar a retiro a los líderes del golpe de Estado. Esto había sido personalmente conversado por el presidente Allende con el comandante en jefe de la Marina, almirante Montero, y con el comandante en jefe del Ejército, general Pinochet».

### *Y la Marina*

El día 31 de agosto, el esquema insurreccional se dibujó todavía con mayor nitidez, cuando el grupo de altos mandos navales dirigidos por José Toribio Merino, obligó al almirante Raúl Montero Cornejo a presentar su dimisión como comandante en jefe de la Armada al presidente Allende.

El hecho ocurrió después que Montero tomara parte en el Consejo Naval Anual de la Armada Nacional, en la mañana del 31 de agosto, para calificar a todos los oficiales ejecutivos de la institución. Al mediodía, en Valparaíso, los altos mandos se reunieron a almorzar. Cuando llegó Montero a sumarse, los almirantes le dijeron que era mejor que se retirara porque iban a deliberar sobre la situación política nacional, y ellos no le tenían confianza. Montero anunció que presentaría su renuncia al presidente Allende, y así lo hizo en la tarde. Dice Joan Garcés:

«Esa tarde, a su regreso a Santiago, comunicó los hechos al presidente Allende y le presentó su renuncia. El doctor Allende se la rechazó y le solicitó que continuara en su cargo, por el bien del país, algunas semanas más mientras lograba desarticular el golpe en la Marina.

»El 11 de septiembre, el almirante Montero fue arrestado por los golpistas y reemplazado en la Comandancia en Jefe por el insurrecto almirante Merino, actual miembro de la Junta Militar.

¿Cuántos otros oficiales fueron arrestados o asesinados por quienes hoy imponen su sangrienta traición en Chile?».

Ese 31 de agosto, también, los organismos civiles al servicio de los generales golpistas habían avanzado un paso más en la conspiración. El Colegio de Abogados, «a petición de diversos colegiados», había preparado un informe «jurídico» sobre si cabía «pedir al Congreso Nacional que declarara la inhabilidad constitucional del Presidente de la República». El Colegio de abogados decía, en ese informe, que sí se podía. Y se hacía la siguiente reflexión, por cuenta de los propios generales:

«Esta acción ilegal e inconstitucional del señor Presidente puede estar determinada por una de dos causas posibles. El Presidente voluntaria y conscientemente, y con propósitos no confesados, se ha propuesto violar sistemáticamente las bases fundamentales de nuestro sistema institucional, o bien el Excelentísimo señor Allende se ve imposibilitado de ajustar su conducta a esas normas que le imponen los deberes inherentes a su cargo».

En ambas alternativas se «justificaba» aparentemente la destrucción de la democracia burguesa chilena por parte del aparato militar de la burguesía, y su reemplazo por un sistema más seguro: el fascismo.

### *Los últimos días*

El diario «El Mercurio» reflejaba ya el 31 de agosto la situación nacional. En su primera página, traía una noticia procedente de Valparaíso que decía así:

«Con la firma del juez naval, vicealmirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Primera Zona Naval, se presentó la petición de desafuero contra el senador socialista, Carlos Altamirano, y del diputado mapucista, Óscar Garretón.

«La petición de desafuero se fundamenta en el respaldo entregado por ambos parlamentarios a los marineros que intentaron apoderarse de dos buques de la Armada para desencadenar una guerra civil».<sup>15</sup>

Ya había 20 provincias, de las 25 que tiene Chile, en que los dueños de camiones y colegios profesionales manejados por demócratacristianos y nacionales estaban en huelga.

También en primera página, con ilustración fotográfica del general en retiro en uniforme. «El Mercurio» informaba:

«El próximo martes viajará a Paraguay el general (R) Ro-

berto Viaux Marambio, quien saldrá en libertad a las 24 horas del lunes. Viaux cumplirá en dicho país la pena de extrañamiento a que lo condenó la justicia militar en relación a los procesos acumulados por los sucesos del Regimiento Tacna y los que culminaron con la muerte del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército. El general (R) Viaux debe cumplir una condena de cinco años fuera del país.»

En la segunda página del mismo periódico, había un «estudio» titulado *Impedimentos Constitucionales para el Desempeño Presidencial*, preparado por un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Al lado, en la sección de «comentarios», uno titulado *La Patria y la Conciencia Militar*, que terminaba con el siguiente párrafo: «En consecuencia, y de modo especial para los militares, obedecer y colaborar con este Gobierno es traicionár a la patria.»

En páginas interiores, una declaración del presidente de la Cámara de la Construcción de Chile, organismo que reunía a los empresarios monopólicos de esa actividad, en la cual se leía:

«El problema de Chile se soluciona con un sentido patriótico que correspondería al señor Allende acoger y que ha sido reiteradamente pedido por toda clase de instituciones y gremios en Chile, y es que se vaya»...

El 2 de septiembre, domingo, el periódico izquierdista «Puro Chile» provocaba una conmoción nacional, al publicar una larga entrevista con el reo José Luis Riquelme Bascuñán, «cargado» con el asesinato de Araya Peters por la Armada y el Servicio de Inteligencia de Carabineros. La entrevista, rompiendo la incomunicación del reo, hecha por el director del periódico, Mirosлав Popic, demuestra más allá de toda duda que el día del asesinato, Riquelme estaba en su casa, que dos días después fue «cargado» con una confesión falsa, que había sido torturado en los subterráneos del Ministerio de Defensa, con la aprobación del fiscal, Aldo Montagna, y que había capitaneos de la Marina y de Carabineros implicados en un caso de «ocultar a los verdaderos asesinos».

Parte del relato de Riquelme, cuando fue torturado en el subterráneo del Ministerio de Defensa, a fines de julio, decía:

«Imagínese, ahí fueron unas torturas salvajes. Hay una pila de cuestiones que a uno le hacen adentro.

»¿Recuerdas algo?

»Ponían dos sillas, una aquí y otra allá. En una los pies y en la otra las manos. De repente le amarraban los pies con alam-

bres, en los tobillos, entonces estaba usted así afirmado en el aire. Haga cuenta que el medio estaba vacío, colocaba las manos en las sillas y de repente usted quedaba derecho donde le aplicaban la corriente. De repente le colocaban los cables en la cintura, por aquí y «pum». En una me sentaron y me colocaron unos cables de repente ya sentí un golpe fuerte aquí, en la «cuchara» (corazón), como que me iba a ahogar y desde entonces que no me siento bien. Pa' que le digo. Saltaba y me hacían saltar. De repente uno estaba allá cuando luego estaba aquí, al otro lado...»

La denuncia de «Puro Chile» acercaba peligrosamente al conocimiento público el hecho de que el edecán naval de Allende había sido asesinado por sus propios compañeros de armas, en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia, a través del Comando de Ex Cadetes.

El 3 de septiembre transcurrió a la espera de «qué ocurriría el cuatro», para la celebración del tercer aniversario de la victoria de Allende en 1970. Tanto para la Unidad Popular como para los partidos de oposición, era un instante de «medir las fuerzas». Para los generales en contacto con el Pentágono, iba a ser un día de ensayo general.

El 4 de septiembre fue, a partir del mediodía, una jornada festiva. A las ocho de la noche había desfilado frente a la Tribuna Presidencial en la Plaza de la Constitución, un contingente de más de 700.000 obreros y campesinos, empleados y estudiantes, niños y mujeres venidos desde toda la provincia y de las provincias fronterizas. Fue una gran demostración de apoyo al Gobierno por parte de sus partidarios, que estaban sufriendo los efectos de un descalabro económico mayúsculo. Pero los gritos no eran sólo de «Viva Allende» «Viva la Unidad Popular». Eran, más que nada, de «Armas para el pueblo», «Hasta cuándo retrocedes Allende», «Sólo el pueblo armado derrotará al momio armado».

Durante todo el día, aviones de la Fuerza Aérea de Chile sobrevolaron la ciudad, especialmente los barrios industriales del sector sur y las calles centrales, para fotografiar las concentraciones de trabajadores dispuestas para el desfile de aniversario. Hubo sobrevuelos sobre La Moneda y en la noche «ejercicios de bombardeo simulados, con rockets, en blancos de tarros de gasolina de 200 litros, en la Base Aérea El Bosque», con aviones Hawker Hunter.

Hubo fiesta en las calles de Santiago hasta la medianoche

pasada. Y hubo reunión de urgencia en la Fuerza Aérea, analizando las fotografías obtenidas durante el día. El cálculo lo decía: unas seiscientas a setecientas mil personas en Santiago y provincias fronterizas, dispuestas a seguir apoyando al Gobierno constitucional. Gustavo Leigh comentó entre sus subalternos que «si el tiempo sigue pasando, estos huevones izquierdistas van a ganar lejos las elecciones del 76». «Ahí sí que tendríamos a los comunistas en nuestro cogote.»

Los opositores civiles también se asustaron y organizaron para el día cinco una enorme manifestación de mujeres, frente a la Universidad Católica de Santiago, para pedir «la renuncia de Allende» y «un Gobierno de militares». Se producen batallas campales en las calles entre adversarios y simpatizantes de la marcha convocada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional.

Las noticias de provincias eran lamentables. Diez y quince atentados dinamiteros por día contra fábricas, sedes políticas de izquierda, domicilios de dirigentes de obreros y campesinos. El transporte terrestre casi totalmente paralizado. Las actividades del servicio estatal de salud, también en paro. Paros parciales de estudiantes, comerciales y profesionales, agrupados en organizaciones manejadas por los partidos de derecha.

El general Pinochet, el 5 de septiembre, había dicho a Allende que «ahora no es igual que octubre», las Fuerzas Armadas «no podemos garantizar nada» porque la Marina, la Fuerza Aérea y algunos de «nuestros generales quieren que usted se vaya... o cumpla con lo que le pide el Congreso». No podía Allende declarar zonas de emergencia bajo control militar, como en 1972.

El 7 de septiembre, Allende acordó rendirse. En la mañana de ese día llamó a su despacho de trabajo al general Augusto Pinochet y a siete generales de la guarnición de Santiago, y les dijo que había decidido anunciar, «el lunes o martes, o tal vez el miércoles con mayor seguridad», su decisión de llamar a plebiscito para dilucidar «el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento» y promulgar totalmente «la reforma constitucional sobre área de propiedad social de la Democracia Cristiana». Los generales recibieron la noticia «con un gesto de asombro» (según la frase que usó Allende para contarle este suceso a Joan Garcés, la noche del lunes 10 de septiembre). Allende les dijo que así «pacificaremos el país», ya que esos son los motivos del conflicto civil actual. «Nadie podrá decir ahora que

el Presidente de la República no respeta a los otros poderes del Estado». Les explicó que, según sus cálculos, la decisión la podría anunciar el martes o miércoles, porque «este fin de semana tengo que dedicarlo a convencer a la Unidad Popular... y eso va a ser duro».

La decisión de Allende tomó de sorpresa a los generales (todos los que asistieron estaban en el complot montado por el Pentágono a partir de noviembre de 1972). Se reunieron en el propio despacho del comandante en jefe en el Ministerio de Defensa, a una cuadra de La Moneda, para llegar a una simple conclusión: Había que derrocar a Allende ANTES de que anunciara su decisión de poner fin al conflicto con la Democracia Cristiana liderada por Eduardo Frei. Se discutió cuántos días se necesitaban para poner en marcha la *blitzkrieg* preparada desde meses antes para arrasar el Gobierno constitucional, la organización obrera, campesina y de empleados, y destruir la democracia burguesa chilena. «Setenta y dos horas», fue la respuesta técnica del general Sergio Arellano Stark, asistente también a la reunión.

Augusto Pinochet fijó la fecha: el martes 11 de septiembre, a partir de la medianoche del día lunes.<sup>16</sup>

El 7 de septiembre fue un día realmente agitado. Cerca de las tres de la tarde, en Santiago se recibieron noticias de que la Escuadra Chilena, surta en la bahía de Valparaíso, lista para zarpar a unirse con la flotilla de guerra de Estados Unidos para la Operación Unitas anual, se había sublevado, se negaba a zarpar, hasta que «el almirante Montero sea retirado de las filas y el almirante Merino sea nombrado nuestro comandante en jefe».

El general Augusto Pinochet informó al nuevo ministro de Defensa, Orlando Letelier, que él estaba dispuesto a ir a Valparaíso para hablar con los «insurrectos». Viajó en helicóptero, acompañado de otros cuatro generales del Ejército. En Valparaíso se entrevistó con Merino, le comunicó la gravedad de la situación planteada por la decisión de Allende de quitar la base de sustentación pública al golpe militar, y el acuerdo de la mañana en el Ministerio de Defensa, de dar el golpe el día 11 de septiembre.

Cuando Pinochet volvió a Santiago para informar al Ministro de Defensa que «todo está en calma», «la escuadra zarpará según itinerario previsto el día lunes 10», lo que realmente estaba ocurriendo era que las listas de cerca de veinte mil diri-

gentes medios de organizaciones populares, para ser asesinados por los militares insurrectos a partir de la mañana del golpe, ya estaban saliendo a provincias desde las oficinas de los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las listas de los dirigentes superiores para ser apresados (unos tres mil), también seguían el mismo camino, y los funcionarios encargados de tener preparadas las proclamas del día de la insurrección ya estaban escribiendo el borrador para ser examinado por Augusto Pinochet, Gustavo Leigh y José Toribio Merino.

Estas listas habían sido «completadas» a través de una petición especial a las misiones militares norteamericanas en Santiago, que las pidieron a la CIA en Washington, para ser entregadas a los generales insurrectos. Eran muy detalladas: nombre, domicilio, edad, profesión, estado civil y amigos personales más cercanos (entre dos y cinco nombres generalmente).

Como una ironía del destino, en la noche del 7 de septiembre, el cuerpo de generales de Carabineros dio una cena a la que invitó a Salvador Allende. A esa cena también asistió el general César Mendoza Durán, quien se portó muy obsequioso con el Presidente. (En verdad, ese día Mendoza todavía no había sido notificado por los generales Pinochet, Leigh y el almirante Merino de que el golpe se haría el martes próximo. El estaba en una conspiración contra Allende y la mayoría de sus propios generales, pero no sabía fecha, ni forma, excepto en lo que concernía al equipo restringido para la preparación del asesinato del propio Allende.) Este hecho, en la mañana del 11 de septiembre, tal vez hizo que Allende se refiriera a Mendoza, en su último discurso transmitido sólo por Radio Magallanes, a las nueve y cuarenta de la mañana, como «ese general rastrero».

El sábado 8, en la mañana, el presidente Allende citó en su despacho al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh; al comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Montero Cornejo; y al comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte. El Presidente les pidió que como una consideración al momento difícil que vivía el país, y a que en la próxima semana iba a hacer el anuncio de su rendición política, «moderaran» la aplicación de la Ley Sobre Control de Armas, para no «exasperar» a los trabajadores. Los comandantes en jefe le dijeron que siempre habían tratado de impedir «excesos» en esos procedimientos, y ahora impartirían instrucciones especiales en ese mismo sentido.

En realidad, el sábado 8 de septiembre fue aburrido para los reporteros. Y mucho más para los reporteros del diario «El Mercurio» que estaban en un departamento del piso decimotercero del Hotel Carrera, con equipo fotográfico provisto de enormes teleobjetivos, desde el día 2 de septiembre. Ese día, la gerencia de «El Mercurio», en conocimiento de que «algo gordo va a pasar en La Moneda uno de estos días», arrendó un departamento por tiempo indefinido allí, y puso de guardia permanente a un equipo de reporteros. No estaba claro para «El Mercurio» si iba a ser el asesinato de Allende o de algunos de los generales, pero impartió instrucciones a sus reporteros de vigilar cada segundo del día la puerta de La Moneda con sus teleobjetivos.

### *El Juramento*

El 9 de septiembre, domingo, desde las once de la noche, la pesada maquinaria militar puesta en marcha para aplastar al pueblo chileno dio otra vuelta en su eje. A esa hora, en casa del general Augusto Pinochet Ugarte, y después de «una comida social», se reunieron el propio Pinochet, el general Gustavo Leigh; el vicealmirante Sergio Huidobro, director de la Escuela de Infantería de Marina (que adiestraba a los grupos fascistas civiles) y el vicealmirante Patricio Carvajal.

La reunión duró desde las once de la noche del día 9 a las dos de la mañana del lunes 10. Fue una reunión, por lo que parece, de «afinamiento» y «comprobación» de la «operación». Según informes posteriores, se supo que en la tarde del 9, los generales Pinochet y Leigh habían hablado con el general Mendoza, de Carabineros, para que montara su aparato para el martes 11. Y los vicealmirantes Huidobro y Carvajal, también en la tarde del mismo día, habían hablado con el almirante Merino para que se las arreglara para arrestar al almirante Montero en la medianoche del día 10.

Según una declaración a la prensa chilena del general Gustavo Leigh, hecha en noviembre de 1973, allí también «se firmó un documento que guardamos en estricto secreto». Probablemente se trata de un documento que detalla los nombres de los conspiradores, para que así ninguno traicionara la insurrección al martes 11.

Pero lo importante es que a las cuatro de la madrugada del

día 10, o sea dos horas después de terminada la reunión de los conspiradores en casa de Pinochet, un coronel del Ejército chileno, vestido de civil concurrió a la casa del embajador de los Estados Unidos, Nathanael Davis, donde también estaban dos miembros de la misión militar norteamericana en Santiago.

Después de esa reunión nocturna, ocurre un hecho singular: los Servicios de Contrainteligencia radial de la izquierda interceptan un mensaje en clave procedente de los aparatos de radio norteamericanos utilizados en el Ministerio de Defensa, que instruyen a la «fuerza de tarea» de la Operación Unitas, compuesta de tres destructores y un submarino, que se separen; que dos destructores permanezcan «a más de doscientas millas de Valparaíso, mar afuera», y un destructor y el submarino a más de doscientas millas de Talcahuano, porque la Operación Unitas «puede postergarse indefinidamente».

Esa misma madrugada, la misión militar brasileña es puesta en alerta por los militares chilenos, y se les pide que «el día 11 no salgan a la calle, hasta nuevo aviso».

Todo esto puede explicar lo que para algunos políticos norteamericanos resultó un misterio. La agencia Inter Press Service indicaba: «Los destructores Tunner, Tatonall y Vesole, y el submarino Clagamore se dirigían en la noche anterior al golpe hacia aguas jurisdiccionales chilenas. Fueron detenidos justo en el límite, y separados en dos grupos, por una oportuna advertencia radial de la Embajada norteamericana en Santiago, diez horas antes de que estallara el sangriento golpe de Estado.»

Y también puede explicar el siguiente cable de la agencia española EFE, del 13 de septiembre, procedente de Washington, que decía: «El presidente Nixon supo con anticipación de los preparativos del golpe de estado en Chile, pero el Gobierno norteamericano decidió no informar al presidente Allende, reveló hoy el diario "The Washington Post". En una información que aparece en la primera página del matutino de la capital federal, se confirmó que los Estados Unidos habían sabido por lo menos doce horas antes del golpe militar que derrocó al presidente Allende en Chile. Según el periódico, un oficial del Ejército chileno informó a otro oficial del Ejército norteamericano en Chile del plan contra Allende. La información fue entonces pasada a los más altos niveles de Washington y se tomó la decisión de no intervenir, según el "Washington Post".

»El periódico informó que estos detalles fueron revelados ayer por Jack Kubish, secretario de Estado Adjunto norteamer-

ricano y coordinador de la Alianza para el Progreso, a un grupo de senadores norteamericanos integrantes del Subcomité de Relaciones Exteriores para Asuntos del Hemisferio Occidental».

El lunes 10, en La Moneda, había una especie de tranquilidad. El único dirigente político que dio una pista de lo que estaba pasando, fue el dirigente de un pequeño partido de la UP, la Acción Popular Independiente, Rafael Tarud, quien, después de conversar con Allende, señaló: «Le dije que el API es partidario de solucionar el conflicto del transporte de inmediato, por ley; de promulgar las reformas constitucionales del proyecto Hamilton-Fuentealba y otros hechos que significarían la paz social.»

En la tarde, a las seis, en el décimo piso del Ministerio de Defensa, el ministro Orlando Letelier citaba a los directores de diarios y revistas de Santiago para decirles que «la situación tenía una solución política que pronto se dará a conocer por el propio Presidente», que pedía a los directores de medios informativos que «en las noticias sobre los allanamientos de la Ley Sobre Control de Armas no pretendieran incorporar a las Fuerzas Armadas a la política contingente». La sensación de Letelier era de optimismo, de confianza en que el discurso de Allende del martes iba a resolver la cuestión y que «todo estaba en calma».

Sin embargo un signo ominoso fue notado por más de un reportero: ninguno de los tres comandantes en jefe asistió a la conferencia del ministro de Defensa, cosa absolutamente inusual.

La verdad era que, a esa misma hora, en los pisos inferiores del mismo edificio donde Letelier hablaba con los directores de diarios, los generales complotadores preparaban los últimos detalles de la ocupación militar del país, a sangre y fuego, a partir de las próximas seis horas, para cumplir con la orden que el Pentágono norteamericano había dado diez meses antes, en noviembre de 1972.

1. En el aspecto presupuestario, la dedicación del Gobierno de Allende por dar un tratamiento especial a las FF.AA. fue realmente notable. Cifras obtenidas de *El Estado de la Hacienda Pública*, de los ministros de Hacienda Américo Zorrilla y Orlando Millas, para 1971 y 1972, daban los siguientes indicadores:

En 1971, el presupuesto en escudos para las FF.AA. era el 8,9 % del presupuesto fiscal total. Para 1972, subió al 10,2 %.

En 1971, el presupuesto en dólares para las FF.AA. era el 13,1 % del presupuesto fiscal en dólares. Para 1972, subió a 14,6 %.

En 1971, el presupuesto de Defensa era sólo 17 % mayor que el de Salud. En 1972 el presupuesto de Defensa ya era 35 % mayor que el de Salud.

En 1971, el presupuesto de Defensa equivalía al 49,5 % del presupuesto de Educación. En 1972, el presupuesto de Defensa ya era el 61,3 % del de Educación.

El 16 de noviembre de 1971, se aprobó que el Ministerio de Hacienda entregara un presupuesto extra de 390.972.000 escudos (unos 32 millones de dólares) para iniciar un plan quinquenal de la UP para equipar de viviendas a las Fuerzas Armadas (se proyectaban unas 7.000 viviendas para oficiales y suboficiales). En el diario «La Nación», del 15 de enero de 1972, se informaba que el general Oscar Bonilla, director de Personal del Ejército, había pronunciado un discurso en la entrega de 56 nuevas viviendas a los oficiales, diciendo: «Sólo estamos comenzando. Rotunda e incommovible es nuestra decisión y nuestra convicción de seguir adelante... La institución se ha planteado esta iniciativa y luchará por ella, consciente de que dotando algo vital para cada uno de sus integrantes.» Y agregaba el mismo periódico: «Por su parte, el funcionario de Gobierno que asistió a la ceremonia de entrega de casas, dijo que "en el nuevo plan para este año, se contempla un número mayor de viviendas para entregar en forma extraordinaria al cuadro permanente del Ejército".»

2. Para un detalle adicional sobre estos planes de estudio confeccionados en el Pentágono norteamericano, ver «Causa ML», núm. 8, mayo de 1969, que publicó el texto completo del Manual FM 31-15, utilizado por los cadetes de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, en sus cursos de postgraduados en la Zona del Canal de Panamá. Esta publicación causó «violentas polémicas» en Chile (Alain LABROUSSE, *L'Experience Chilienne*, París 1972, p. 152). Ver «Causa ML», núm. 2, septiembre-octubre de 1968. Más documentación sobre el mismo tema se encontrará en *Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile* Alain Joxe, «Causa ML», núm. 21, julio-agosto de 1971, p.p. 20-25, artículo mío sobre las FF.AA. y la Unidad Popular.

Al respecto, en el libro de Labrousse podemos leer: «Pero incluso antes de que entrase en vigor el nuevo reglamento del general Schneider (se refiere a la concurrencia a Fort Gulick, en postgrado, de los cadetes de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins), entre 1950 y 1965, ya 2.064 militares chilenos habían sido preparados en los Estados Unidos y 549 fuera de los Estados Unidos, es decir, en las escuelas antiguerrilla de los países sudamericanos.»

3. Una denuncia sobre estos «seis puntos» del general Manuel Torres de la Cruz se publicó en el periódico oficial de los cordones industriales de Santiago, «Tarea Urgente», en junio de 1973. Este periódico tenía 45.000 ejemplares de venta, principalmente entre los obreros, y era confeccionado por cuadros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y un sector del partido socialista. La denuncia afirmaba que a través de «oficiales de Carabineros patriotas» se había logrado obte-

ner esta información que revelaba a Manuel Torres de la Cruz como un conspirador. Sin embargo, los sucesos del 29 de junio de 1973 (amotinamiento militar) se publicaron esta espectacular denuncia en la tormenta noticiosa sobre el alzamiento, y no se revivió hasta agosto-septiembre de 1973, en los diarios «Puro Chile» y «Las Noticias de Última Hora». En estas mismas publicaciones se denunció el origen militar de esa Ley de Control de Armas, a través de la conexión de Juan de Dios Carmona y el general Oscar Bonilla, poniendo énfasis en el carácter antipopular de la legislación aludida. Ver «Aurora de Chile», agosto de 1973 (periódico del partido socialista de 35.000 ejemplares de tirada).

4. Las estadísticas de los allanamientos provienen de síntesis hechas por «Última Hora», revista «Punto Final» y diario «Clarín» a fines de agosto y principios de septiembre de 1973. Lo mismo ocurre para los atentados y sabotajes de las organizaciones fascistas, reproducidas después en cables de PRENSA LATINA en el diario «El Expreso» de Lima, del 13 al 30 de septiembre de 1973.

5. En marzo de 1973, el periodista Eugenio Lira Massi, en su columna La columna impertinente, que aparecía tres veces a la semana en el diario «Puro Chile», y Fernando Rivas Sánchez, en el mismo periódico, denunciaron de manera lateral este suceso sin nombrar al contralmirante Ismael Huerta Celis. Ambos columnistas presentaron la anécdota como probatoria de que había «altos mandos militares» involucrados en la conspiración para derribar al Gobierno constitucional, y que esos altos mandos protegían a los sabotadores y dinamiteros de los grupos terroristas de derecha.

6. Los generales Herman Brady Roche, Mario Sepúlveda Squella y Washington Carrasco, además de los coroneles Augusto Lutz (después del golpe militar ascendido a general de brigada y nombrado secretario general de la Junta Militar, ascendiendo al cargo de Jefe del Servicio de Inteligencia Militar hasta diciembre de 1973) y Sergio Julio Polloni Pérez (ascendido en diciembre de 1973 a jefe del SIM), formaron el equipo central del SIM durante los tres años de Gobierno de la Unidad Popular. En su oficina del SIM en el Ministerio de Defensa (noveno piso, oficina número 85) este grupo era el encargado de coordinar el trabajo con los asesores de Inteligencia Militar del Ejército de los Estados Unidos, encabezados, según denuncia del periódico «Tarea Urgente», en enero de 1973, por el coronel Thomas H. Jones (el día 21 de julio de 1971, al retirarse de Chile, el coronel Jones fue condecorado con La Estrella al Mérito Militar, en ceremonia presidida por el general Carlos Prats González). Todos ellos, junto al coronel Manuel Contreras Sepúlveda, comandante del Regimiento de Tejas Verdes (en el puerto santiaguino de San Antonio) y el comandante de la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, teniente coronel Dante Marchesse, son graduados de la Escuela de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., en especialidad de Inteligencia, del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá. De este equipo del SIM, los generales Brady y Carrasco, y los coroneles Lutz y Polloni, hacían frecuentes viajes al Southern Command, a través del puente aéreo existente entre ese comando militar norteamericano y los Servicios de Inteligencia de los Ejércitos de América Latina (para Chile ese puente aéreo está constituido así: Base Aérea de Los Cerrillos, en Santiago; Base Aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta; y Albrook Airfield, en la Zona del Canal). Para que el lector tenga una idea de lo que significa esta ligazón directa entre el Comando Sur del Pentágono y los generales chilenos, voy a reproducir una pequeña crónica de François Schlosser, aparecida en «Le Nouvel Observateur», número 467, 28 de octubre de 1973: «Los panameños lo llaman el muro de la vergüenza. Es la barrera de alambre y rejas que separa al universo sudamericano de la "Zona del Canal", bajo jurisdicción norteamericana. Tras el tejido de alambre reina el *american way of life*. Enormes edificios albergan los servicios de un organismo que hoy hace temblar a América Latina: el Southern Command. Su última victoria: Chile... El Southern Command es al mismo tiempo una central de información, una "universidad militar", puridisciplinaria, y una base operacional. En la escuela antiguerrilla, miles de oficiales y suboficiales latinoamericanos se entrenan para la guerra contra la subversión. Los oficiales reciben una formación técnica completa en las diversas escuelas militares diseminadas por la Zona del Canal: Escuela de Telecomunicaciones, Escuela de Estado Mayor, Escuela

de Aviación, etc. Construcciones subterráneas, locales excavados en las rocas alojan el centro neurálgico de un sistema de comunicaciones que cubre todo el continente... Aquí, los responsables norteamericanos se encuentran en contacto directo, por teléfono, o por teletipo, con sus corresponsales instalados en todas las capitales sudamericanas donde su papel es más importante que el de los embajadores norteamericanos "oficiales". Una red aérea se superpone a la de telecomunicaciones. Para trasladarse a Río, Santiago, etc., los agentes civiles y los "alumnos" militares del Southern Command disponen de sus propios aviones, de sus propios aeropuertos... La creación del Centro se remonta a los comienzos de la década de 1960. Significa una opción estratégica realizada por Washington. Después del fracaso de la Alianza para el Progreso para la «subversión» castrista, los norteamericanos decidieron jugar la carta de los militares... En las Escuelas Militares de la Zona en Panamá nació un mito: el de la «solidaridad» de los soldados sudamericanos. La acción psicológica dio excelentes resultados. Tema: «Tenemos las mismas preocupaciones, somos patriotas, queremos reformas y tenemos un enemigo común: el comunismo.» Entre los oficiales y los suboficiales católicos del Sur, generalmente provenientes de las clases medias, estas fórmulas simplistas bastaban casi siempre para cimentar una conciencia política elemental. 35.000 de ellos recibieron las enseñanzas del Southern Command. Formaban los cuadros de los ejércitos que tomaron el poder en Brasil, en Bolivia, en Chile, etc.»

En el «New York Times» del 23 de octubre de 1973, firmado por Drez Middleton, se publicaron detalles también del significado del Southern Command, como elemento de control del Ejército norteamericano sobre la mayoría de los generales latinoamericanos. Párrafos de esa crónica: «Nos mantenemos en contacto con nuestros graduados y ellos se mantienen en contacto con nosotros», dijo el director coronel William W. Nair... La escuela imparte 38 cursos separados, todos ellos en español. El año pasado, 1.750 oficiales, cadetes y hombres de tropa de 17 países completaron sus cursos... Diseminados a través de América del Sur y del Caribe hay más de 170 graduados de la Escuela Militar de EE.UU. para las Américas; entre ellos se cuentan varios jefes de estados mayores y directores de Inteligencia... Los cuatro departamentos de instrucción de la escuela son: Comando, Operaciones de Combate, Operaciones Técnicas, Operaciones de Apoyo...»

Los generales Brady, Carrasco y Sepúlveda son casos típicos de estos graduados. El más viejo de ellos, Brady, tuvo la siguiente trayectoria: en 1943 fue jefe de la Zona Militar de Chuquicamata, en 1946 se graduó en el Southern Command; en 1947 y hasta 1953, fue nombrado delegado del Ejército en la Corporación de Fomento de la Producción; en 1959 viajó a Fort Benning, EE.UU., para un curso militar; después pasó al Comando de la VI División Blindada en el norte del país; jefe de Estado Mayor de la II División, comandante de la II División, y actualmente (1974) jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas chilenas. El general Carrasco, con los mismos diplomas militares en los EE.UU., es ahora Jefe de la Misión Militar chilena en Washington.

7. Agustín Toro Dávila fue ascendido a general de brigada en octubre de 1973, en forma apresurada, cuando todavía estaba en la Embajada de Chile en México, como adicto militar. Toro, de oscura trayectoria, era, sin embargo, amigo de extrema confianza del general Augusto Pinochet. El senador Bulnes Sánfuentes, elegido por la provincia de Concepción, realizaba frecuentes viajes a esa provincia y, sin secreto de ninguna especie, visitaba permanentemente a Carrasco en su oficina de comandante en jefe de la III División (denuncias en «Punto Final», «El Rebelde» y «Puro Chile» de agosto-septiembre de 1973).

8. «Los militares chilenos han tenido una larga y estrecha relación con los Estados Unidos, y el Pentágono estima que los 90.000 soldados, marinos, aviadore y carabineros (la fuerza policial nacional) chilenos, están entre las mejores Fuerzas Armadas del continente. Entre 1950 y 1970, Chile recibió más ayuda militar (175,8 millones de dólares) que cualquier otro país latinoamericano, excepto Brasil. Esto significa alrededor del 10 % del presupuesto total de Defensa en el mismo período. Las mayores cantidades de ayuda fueron proporcionadas antes de las elecciones de 1964 y 1970, para aplacar el descontento en los militares, el cual podría ser utilizado por los fuertes partidos de izquierda. Este alto nivel ha sido mantenido durante los

tres años últimos, incluyendo proyectos garantizados para 1974, el cual totaliza 45,5 millones de dólares. Esto es el doble del total correspondiente a los cuatro años previos. En un momento, cuando la ayuda económica se había sumergido a menos de 4 millones de dólares, esto significaba una liberalización de la ayuda militar a Chile. (En cifras, significa que entre 1971 y 1974, Estados Unidos proporcionó 11,37 millones de dólares anuales a las FF.AA. chilenas, contra un promedio anual de 5,75 millones de dólares entre 1967 y 1970, y un promedio anual de 8,98 millones de dólares entre 1950 y 1966.)

»La Fuerza Aérea de EE.UU. tiene una relación particularmente estrecha con sus colegas chilenos, construida por la Misión de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en Santiago durante los últimos 20 años. Más del 70 % de la Fuerza Aérea chilena está constituida por aviones y helicópteros construidos en los EE.UU. Actualmente, los militares chilenos están esperando un embarque de 20 cazas A-4B Skyhawk, que eran de la U.S. Navy, utilizados previamente en Vietnam, los cuales están en un aeropuerto en la Davis-Monthan AFB en Arizona. En efecto, la pasada primavera los Estados Unidos ofrecieron conceder crédito a Chile y otros cuatro países latinoamericanos para comprar cazas F-5E Freedom. La oferta es particularmente significativa ya que el presidente Nixon debe firmar un documento especial para pasar sobre las restricciones acordadas para vender armamento refinado a los países subdesarrollados. Esto puede sea hecho solamente si el Presidente determina que tal financiamiento es importante para "la seguridad nacional de los EE.UU.", lo cual, obviamente, él hizo en este caso... Durante las audiencias del Senado sobre ayuda exterior, el senador Inouye también cuestionó la lógica de conceder créditos militares a un país que había expropiado intereses norteamericanos. El almirante Raymond Peet justificó esta política hacia Chile en el comité del Senado. Explicó que los Estados Unidos prefieren que los países subdesarrollados "compren americano" en vez de que miren hacia otra parte para equipo militar... Más todavía, según Peet, «una de las grandes ventajas conseguidas por los EE.UU. de tales programas de ventas al extranjero es la considerable influencia que se deriva de proporcionar apoyo para esos aparatos aéreos». Proveyendo cazas F-5E o Skyhawks, preservaría cierta orientación pronorteamericana entre los militares chilenos en un momento de tensión entre los Gobiernos de los dos países.

»La Marina chilena también ha continuado recibiendo créditos militares y llevando a cabo maniobras conjuntas con la U.S. Navy. En efecto, el día del golpe, buques norteamericanos estaban en ruta hacia Valparaíso para hacer maniobras de rutina, pero se desviaron después de un breve encuentro con un navío chileno.

»El suministro de material es solamente una de las tácticas que usa Estados Unidos para influir a los militares chilenos. En los últimos 20 años, más de 4.000 oficiales chilenos han sido adiestrados en los EE.UU. y en las escuelas norteamericanas de la Zona del Canal de Panamá. El general Pinochet, cabeza de la Junta Militar, sirvió como agregado militar en la Embajada chilena en Washington, y fue varias veces al U.S. Southern Command en la Zona del Canal. Pinochet es conocido por ser duro, y en 1972 advirtió: "Espero que el Ejército no tenga que salir a las calles, porque si lo hace, sale a matar". Además, de acuerdo a la revista "Newsweek" del 24 de septiembre de 1973, los otros miembros de la Junta chilena, Gustavo Leigh, de la Fuerza Aérea; almirante Toribio Merino, de la Marina; y el general César Mendoza Durán, de Carabineros, han estado todos algún tiempo en los Estados Unidos. Y en 1971, una misión militar norteamericana de alto nivel visitó a los líderes militares chilenos. (Ver nota 17.)

»Los Carabineros también han recibido ayuda norteamericana a través de la Oficina de Seguridad Pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo. El programa bombeó cerca de 2,5 millones de dólares desde 1961, pero fue terminada en 1971 por el gobierno UP. En 1970, de acuerdo a un artículo del "Washington Post" del 1 de octubre de 1970, el asesor de la OSP estacionado en Chile, Joseph Vassile, fue expulsado por estar comprometido en un complot terrorista de derecha para desacreditar al presidente Allende. Vassile fue transferido a Vietnam, donde trabajó en un programa de pacificación. Los Carabineros están jugando un importante papel en la Junta y lo más seguro es que caigan, cada vez más, bajo la influencia de los militares.»

Por último, como un ejemplo de la dependencia de la Fuerza Aérea chilena de la norteamericana, este dato: en 1971, la Fuerza Aérea chilena hizo 21 "vuelos logísticos al exterior". Los 21 vuelos fueron a los Estados Unidos (tomado del diario «La Nación», marzo de 1972, con ocasión del 42 aniversario de la Fuerza Aérea chilena, a cuya celebración asistió como invitado especial el jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, John D. Ray).

9. Como establecimos en la nota 2, la existencia y reconstrucción del «informe de octubre» del Pentágono fue obtenida por algunos sectores de la izquierda a través de los discursos, arengas y reuniones semipúblicas de mandos medios militares con su tropa. Pero, por supuesto, también hubo información adicional y bastante exacta, al parecer, de algunos oficiales leales a la democracia chilena, cuyos nombres el autor no puede citar porque todavía están en servicio activo en Chile y no han sido detectados por los Servicios de Inteligencia de los generales insurrectos. Ese informe del Pentágono había sido un cambio radical en su actitud de «esperar y ver» mantenida hasta octubre de 1972, y que reflejaba el pensamiento de un sector importante de los consorcios multinacionales norteamericanos que influyen sobre el Gobierno de Washington. Este sector, encabezado por el grupo Rockefeller, se oponía a la actitud dura y de destrucción inmediata del Gobierno de Allende por parte de grupos como la ITT, la Anaconda y la Kennecott. Esta dualidad de criterios explica lo ocurrido en 1970, 1971 y 1972 en Chile, cuando las Fuerzas Armadas, manejadas por el Pentágono, se mantuvieron al margen de la situación política en desarrollo, para entrar después en 1973 en la senda del golpe. Para un estudio detallado de la dualidad de criterio entre los grupos de consorcios norteamericanos respecto a Chile y su Gobierno Allende, ver *The Chilea Road To Socialism*, de Dale Johnson, ya citado; *U.S. Policy in the Making: Chile, to Accommodate or Crush*, y *The Coincidence of Internal and External Counterrevolutionary Forces*. También se sugiere ver mi obra: *El imperialismo yanqui en Chile*.

Una ilustración de las causas del «esperar y ver» lo pueden dar estos párrafos sacados de la versión de «NACLA», de Nueva York, de las sesiones del Council on Foreign Relations of United States. En la sesión del 14 de diciembre de 1970, Jérôme I. Levinson, del BID, dice: «La experimentación de diversos sistemas políticos en Latinoamérica es inevitable. El proceso cambiante de las sociedades latinoamericanas promoverá variaciones en el *statu quo* de la propiedad norteamericana en el hemisferio. Pero los intereses norteamericanos no son incompatibles con el desarrollo social de Latinoamérica. Podemos llegar a acuerdos con los cambios como ha sucedido en México.» Covey T. Oliver, del Departamento de Estado, decía: «Se debe dar a Chile todas las oportunidades para que logre éxito con su nuevo Gobierno. Tal como no se puede considerar a Cuba como un fracaso, a causa de los efectos de la política norteamericana después que Castro subió al Poder, hay que darle a Chile una oportunidad.» Y Walter Sedwitz, de la OEA, dice en la misma sesión: «Si el Gobierno fracasa, habrá una radicalización en Chile y un problema de seguridad para Estados Unidos.»

Por supuesto, esta actitud cambió cuando en Chile comenzó a gestarse un movimiento revolucionario de masas incontrolable por los partidos de izquierda a medida que pasaba el tiempo y, por lo mismo, fuera del alcance de controlar por el clásico juego democrático burgués, tan sólido en Chile. Ya no se trataba de «variaciones» en el *statu quo* de las inversiones norteamericanas, sino de revolución social y expulsión de las inversiones norteamericanas del país. Eso unió a los consorcios en un solo criterio y, coherentemente, al Pentágono: fin para el Gobierno de Allende.

10. Esta «incapacidad» de Allende para salir de la crisis tenía su fundamento en que la alianza entre los partidos Demócrata Cristiano, Nacional y Demócrata Radical, impedía toda legislación en el Parlamento que permitiera, vía impuestos a la oligarquía, reducir el déficit fiscal y controlar la especulación desenfrenada de los grandes magnates de la industria y el comercio; y vía la aprobación de una ley contra los delitos económicos, frenar la escandalosa forma en que los industriales, comerciantes y latifundistas saboteaban la economía nacional. En el Parlamento, elegido en 1969 las fuerzas estaban así: Partidos de Gobierno: 80 diputados y senadores; Democracia Cristiana: 75 diputados y senadores; Partido Nacional

y Democracia Radical: 45 diputados y senadores. Así, la mayoría opositora era de 120 a 80, lo que bloqueaba toda iniciativa legislativa y permitía barrenar políticamente al Gobierno con «acusaciones constitucionales» a los ministros de Estado. En los 33 meses de Gobierno, Allende tuvo que cambiar 22 veces la composición de su Gabinete, a causa de estas maniobras. Estaba lejos el 24 de octubre de 1970, cuando el Parlamento votó así: 153 senadores y diputados por Allende como Presidente; 35 por Alessandri y 7 en blanco.

Esta especie de empate político entre el Parlamento y la Presidencia, se mantuvo aun después de marzo de 1973, cuando el Gobierno aumentó a 84 sus senadores y diputados, y la oposición disminuyó a 111. Por eso, el 18 de julio de 1971, el secretario general del partido socialista, Carlos Altamirano decía: «Las fuerzas políticas de Chile se encuentran transitoriamente en un empate social. Frente a este empate nuestra estrategia se orienta a romperlo y a utilizar esa ruptura para impulsar un fuerte proceso de movilización de masas... y radicalizar el proceso revolucionario.» Esta táctica fue rotundamente rechazada por Salvador Allende y la mayoría del Comité Central del Partido Comunista de Chile, que jugaron siempre a la tesis de «no radicalizar» y «consolidar lo conquistado». Esto llevó a Allende y al PC de Chile a plantear la idea de conversar con la Democracia Cristiana, contra lo cual se alzaron el PS y el MAPU. La revista del MAPU, «De Frente», número 12, del 29 de junio, denunciaba que «la burguesía, encabezada por Frei y Jarpa, ataca por partida doble, intentando derrocar al Gobierno u obligarlo a transar... Hacen entrar a la cancha a generales sediciosos... Calientan el clima para el momento de la insurrección fascista... Lo que pretende la DC es que la propia Unidad Popular se haga el harakiri, congelando el proceso, reprimiendo a los que exigen avanzar, separándola así de su base social más genuina... Para el caso de que el Gobierno se mantenga firme, la DC cuenta y sabe que sus aliados preparan la otra salida». Por su parte, la revista «Chile hoy», también socialista, explicaba en ese mismo mes que el diálogo con el PDC era sólo un pretexto de los generales golpistas para «utilizar las inaceptables exigencias planteadas para reforzar la embestida final contra el proceso revolucionario». Y eso fue así: cuando Allende anunció su rendición política para el 11 de septiembre, los generales fijaron ese día para el golpe; querían impedir, precisamente, que Allende se rindiera.

11. La primera referencia oficial que los chilenos tuvieron de esa idea quirúrgica de los generales insurrectos (antes los diarios de izquierda habían informado sobre este pensamiento cavernario de los generales conspiradores, sobre todo en agosto y septiembre), fue la misma noche del 11 de septiembre de 1973, cuando por cadena nacional de TV, el general Gustavo Leigh explicó que el golpe se había dado para «extirpar el cáncer marxista en Chile». El 19 de septiembre, en el diario «El Mercurio», el general Pinochet declaraba que «cuando hayamos extirpado el tumor maligno del marxismo... el país recuperará todas sus libertades, ya que es por ellas que nosotros hemos luchado». El día 11 de abril de 1974, la Junta Militar emitió una *Declaración de Principios del Gobierno de Chile*, en que se escribe que «resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos», y qué para ello «ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía» (cable AP, fechado en Santiago de Chile, el 11 de marzo 1974, reproducido en «La Estrella de Panamá», el 13 de marzo de 1974). El 18 de junio de 1974, «La Estrella de Panamá» publica en la primera página de su segundo cuerpo un cable AP, desde Santiago de Chile, bajo el título *Reorganizarán educación con enfoque antimarxista*, que comienza así: «Alrededor de 600.000 profesores y maestros iniciaron ayer una consulta nacional de dos días para estudiar la reorganización de un enfoque antimarxista de la educación.» Y agrega que el documento repartido por la Junta Militar para ser aprobado, señala que «la educación no aceptará la participación de profesores que promuevan la enseñanza de doctrinas nacionales o foráneas, como el marxismo». Los profesores tienen que indicar a las autoridades militares, personalmente, si están de acuerdo o no con este documento. En Chile hay estado de «guerra interna», «estado de sitio» y «suspensión de las garantías individuales».

12. La petición de los generales, sobre todo por parte de Pinochet, resultaba doblemente cínica porque el día 6 de marzo de 1973, el comandante en jefe subrogante del Ejército, general de división Augusto Pinochet, al mando de las fuerzas militares en todo el país que «garantizaron una elección democrática, limpia y sin incidentes, y con absoluta imparcialidad», emitía una declaración pública utilizando esa misma frase. Lo mismo hacía el director del Registro Electoral, Andrés Rillon, demócratacristiano, treinta días más tarde, después que los Colegios Escrutadores (formados todos con mayoría demócratacristiana y nacional) revisaron UNO POR UNO todos los votos. Rillon dijo que había sido «una de las elecciones más limpias de la historia de Chile». Sus palabras aparecieron en todos los periódicos nacionales de la época.

13. Los torturadores eran el jefe del Servicio de Inteligencia Naval, capitán Gajardo; el capitán de Infantería de Marina Koller; el capitán de Inteligencia Naval Acuña; los tenientes Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia y Maldonado; y el subteniente de Infantería de Marina Boetsch. Las torturas se realizaron en el Fuerte Borgoño, de Talcahuano, y en la Academia Naval de Valparaíso. (Denuncias de «Última Hora», «Puro Chile», «Clarín», «Punto Final» y «Chile Hoy», agosto y septiembre de 1973).

14. Un párrafo de la carta de Prats decía: «Al apreciar, en estos últimos días, que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebra de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del Gobierno Constitucional» (copiado de «Chile Hoy», número 64).

15. El segundo párrafo de la noticia dejaba al descubierto toda la falsedad que había en la maniobra de Merino de culpar a Carlos Altamirano, Garretón y Enríquez de «subversión» en la Marina, para tener el pretexto del «golpe rojo». Sucede que ahora Merino no solicitaba el desafuero de estos parlamentarios por «subversión» (claro, no podía presentar prueba alguna al Senado ni a la Cámara de Diputados), sino por «el respaldo entregado por ambos parlamentarios a los marinereros», lo cual, era de toda evidencia que significaba POR HABER DEFENDIDO PÚBLICA Y REITERADAMENTE A LOS MARINEROS ACUSADOS FALSAMENTE DE INTENTAR UNA SUBVERSIÓN; es decir, por defender a acusados de subversión. La verdad es que a estas alturas de la conspiración militar, sus jefes no se cuidaban ni siquiera de mantener el pudor intelectual de hacer coherentes sus declaraciones, acusaciones y dichos.

16. Son notables las coincidencias entre los movimientos de los generales insurrectos chilenos y la misión diplomática y militar de los Estados Unidos en Santiago. Ocurre que en la mañana del 7 de septiembre, los generales acordaron derribar a Allende el día 11, cuatro días más tarde y «el embajador de EE.UU. en Chile, Nathanael Davis, viajó a los Estados Unidos el viernes 7 de septiembre (cuatro días antes del golpe), se reunió con Kissinger el día 8 y volvió a Chile el día 9» (citado de *Nacra's Latin American and Empire Report*, vol. VII, número 8). Este Davis fue director de Cuerpos de Paz en Chile en 1962, y en 1968 fue destinado a Guatemala, donde dirigió un «programa de pacificación política» similar a los realizados en Vietnam. «Para 1971 ese programa había dejado 20.000 personas muertas» (citado de la misma fuente). Jack Anderson, en el «Washington Post» del 10 de diciembre de 1972, cita un cable mandado por Davis a Nixon, desde Santiago, pocos días antes, que dice: «Tal vez lo más significativo ahora es la creciente convicción, en los partidos de oposición, sector privado y otros, que la oposición es posible... Los objetivos (de Allende) se ven cada vez más como incompatibles y como que están yendo más allá de lo que se puede aceptar. Si los intereses de la oposición tienen que ser protegidos, la confrontación no se puede evitar.» Bueno, la confrontación vino y el programa de «pacificación» en Chile costó 15.000 muertos en los primeros 18 días, según datos de las fuentes de la resistencia que, en general, están formadas por los mismos informadores que la izquierda tuvo, durante el Gobierno, en el seno de las Fuerzas Armadas, y que ahora esperan la oportunidad para luchar por la democracia de nuevo.